

EQUITIERRA

No. 1

REVISTA RURAL LATINOAMERICANA

AGOSTO 2008

Una publicación de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Territorializar el desarrollo rural latinoamericano

Territorios de la **Ciudadanía:**
entrevista con el **Ministro**
de **Desarrollo Agrario**
de **Brasil**

El **tesoro**
cultural de la isla
de **Chiloé**



15
Territorializar: uno de los desafíos de la Latinoamérica rural.



22
El crecimiento agropecuario y el bienestar rural: un análisis en profundidad.



32
Guilherme Cassel, Ministro de Desarrollo Agrario de Brasil, explica el novedoso programa Territorios de la Ciudadanía.



40
El poderoso valor cultural de la isla de Chiloé.

CARTAS A EQUITIERRA: Si tiene sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a equitierra@rimisp.org

SUSCRIPCIONES: 2.300 personas se han suscrito para recibir este primer número de Revista Equitierra. Invite a sus conocidos a leer esta publicación. Para inscribirse gratuitamente, envíe un mensaje con la palabra "INSCRIPCION" a equitierra@rimisp.org

| PAG. | TEMA |
|------|---|
| 3 | Editorial |
| 4 | Noticias |
| 6 | Diversificación de actores y temáticas para el desarrollo territorial: La riqueza arqueológica de la costa norte de Perú, por Raúl Hernández |
| 13 | El país rural, por Manuel Chiriboga |
| 15 | Los nuevos desafíos para el desarrollo rural en América Latina: Territorializar es la consigna, por Valeria Vilardo |
| 22 | Crecimiento agropecuario y bienestar: ¿Una relación desigual?, por Andrea Sanz |
| 30 | Biocombustibles: ¿moratoria o participación?, por Ricardo Abramovay |
| 32 | Guilherme Cassel, Ministro de Desarrollo Agrario de Brasil: "Vamos a garantizar a miles y miles de brasileños el derecho de poder aprovechar el ciclo de desarrollo del país", por Paola Ligasacchi |
| 38 | Turismo y desarrollo territorial rural en Centroamérica: Claros y oscuros de un proceso acelerado, por Ileana Gómez |
| 40 | Identidad cultural como factor de desarrollo: La riqueza de Chiloé, por María Elena Montory |
| 47 | Se creó una asociación de gobiernos subnacionales para mejorar las políticas públicas: Latinoamérica, una red rural, por Virginia Soto-Aguilar |
| 51 | Créditos |

Para pensar y actuar con libertad

En un mundo incierto y cambiante y muchas veces con el viento en contra, buena parte de los actores rurales latinoamericanos han demostrado su capacidad de innovación y adaptación, y han sabido ir forjando un futuro mejor y un nuevo espacio en el concierto regional y global. Por todas partes es posible sorprenderse con la fuerza y creatividad de comunidades rurales, empresarios, organizaciones de productores, gobiernos locales o provinciales, o movimientos sociales que descubren y aprenden nuevas formas de enfrentar los desafíos y capturar las oportunidades del mundo globalizado en que les toca vivir.

El paisaje rural es más complejo, matizado y muchas veces más contradictorio que el del pasado. Ello es así si miramos la ruralidad con los lentes de la ecología, de la política, de la economía, de las ciencias agrarias o de la sociología. Esta complejidad nos confunde y muchas veces la sentimos como amenaza. En realidad, para las sociedades rurales es ante todo una fuente de nuevas identidades y oportunidades.

Pero son muchas, demasiadas las oportunidades que no florecen porque son estranguladas tempranamente por una o más de las manifes-

taciones de la desigualdad. Proponemos al lector que es ésta y no otra la causa fundamental de que la potencialidad enorme de América Latina rural no se transforme en más bienestar para la sociedad global.

El punto que queremos enfatizar, sin embargo, es el de nuestra responsabilidad, tanto individual como colectiva. ¿Por qué persiste y se reproduce la desigualdad? Ciertamente que en gran medida por la acción intencionada de aquellos a quienes la desigualdad les conviene. Pero esa afirmación es de alguna forma una salida fácil. La desigualdad persiste también porque quienes quisiéramos sociedades rurales más equitativas seguimos anclados en ideas y líneas de acción que a estas alturas del partido ya deberíamos haber descartado, por ineficaces.

Asumir nuestra cuota de responsabilidad individual y colectiva por la desigualdad, significa pensar y actuar con libertad. Para aportar un grano de arena en esa dirección y lograr que un público amplio entienda mejor los desafíos actuales del mundo rural, es que ponemos Equitierra en sus manos.

Comité Editorial



Laboratorio Territorial definirá estrategias de valorización de la identidad local

El proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC), conjuntamente con el Centro de Educación y Tecnología

CET-Chiloé, se encuentra organizando su primer Laboratorio Territorial, que buscará definir un método común para diseñar y desarrollar estrategias de puesta en valor del patrimonio cultural en distintos contextos latinoamericanos. Este laboratorio se realizará en Chiloé, Chile, en la semana del 6 de octubre de 2008. Previamente, en Chiloé se han realizado otras actividades: por ejemplo, se realizó un estudio de caso exploratorio, se produjo un mapa de productos y servicios con identidad cultural, se trazaron varias Rutas de Aprendizaje con la Corporación Regional Procasur y se organizó el Congreso de Artesanía e Identidad. **VER MÁS.**



Se invita a participar en el E-Forum "MERCADOS. Las indicaciones geográficas"

E-Forum Terra Madre es una iniciativa de **Slow Food** y ha abierto sus foros de discusión en preparación del evento mundial

de Terra Madre en Turín (23-27 de octubre 2008). El Foro discutirá las indicaciones geográficas como una de las herramientas posibles de valorización de las expresiones únicas de cultura, tradición y territorio. Los invitamos a ingresar y contribuir con sus comentarios a través de **www.terramadre.info**. **VER MÁS.**

Proyecto de Rimisp firmó convenio con Cosude

El Proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC) firmó un convenio de trabajo con la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE-Bolivia para ejecutar la Línea Estratégica Desarrollo de Identidad Territorial-Cultural. El convenio tiene como objetivo desarrollar una experiencia piloto de DTR-IC, sobre la base de la experiencia de Rimisp en Bolivia y Latinoamérica. **VER MÁS.**

Proyecto de Rimisp se abre espacio en Latinoamérica

Claudia Ranaboldo, coordinadora del proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC), participó en el Grupo de Indicadores Económicos en el marco de la reunión de lanzamiento del programa LATAM: Conservación del Patrimonio Cultural en América Latina y el Caribe, organizada en Cartagena por varias instancias vinculadas al sector cultural como **ICCROM** (Centro Internacional para el Estudio de la Preservación y Restauración de la Propiedad Cultural) y el Ministerio de Cultura de la República de Colombia. **VER MÁS.**

Se aproxima Diálogo Rural Iberoamericano

Con el objetivo de proponer vías de solución al problema de la crisis alimentaria mundial, se llevará a cabo un Diálogo Rural Iberoamericano en el que participarán los jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Esta discusión pretende identificar oportunidades de respuesta basadas en la cooperación iberoamericana para enfrentar la crisis tomando en cuenta a actores locales públicos y privados. El diálogo se llevará a cabo el 16 de septiembre, en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar en San Salvador, El Salvador. **VER MÁS.**



Red de periodistas apunta a mejorar la cobertura de temas rurales

Con la participación de 16 periodistas de México, Nicaragua, Ecuador, Colombia, Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Honduras,

se conformó la Red Prensa Rural, un consorcio de profesionales de la prensa escrita masiva de América Latina. La red intenta promover el tratamiento y la cobertura de temas de desarrollo rural para lograr mejores y mayores espacios en los medios de comunicación y debatir la temática. Rimisp se comprometió a apoyar a la red con información relevante a través de sus socios y colaboradores en América Latina. Además, se instaurará un fondo concursable para la producción de materiales periodísticos en los medios de comunicación participantes. **VER MÁS.**



Investigador de Rimisp recibe premio en ciencias sociales

Manuel Chiriboga, investigador principal de Rimisp y secretario ejecutivo del Grupo Chorlaví, recibió el premio Pío Jaramillo Alvarado de la Facultad Latinoamericana de

Ciencias Sociales (FLACSO) sede Ecuador, por su distinguida contribución y trayectoria en las ciencias sociales. Este premio es otorgado cada año como distinción máxima a los aportes científicos de investigadores e instituciones ecuatorianas o extranjeras en las ciencias sociales. Manuel Chiriboga ha sido reconocido por su trabajo en el ámbito de los estudios rurales y la historia económica ecuatoriana. El premio será entregado durante el aniversario de la FLACSO en octubre de 2008. **VER MÁS.**

Fotos, de arriba a abajo: Manoel Marques y Carlos Díaz, Rimisp.

PROCASUR y DTR-IC, juntos aportando valor a Latinoamérica

La Corporación Regional Procasur y el proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural (DTR-IC) han renovado su trabajo conjunto. Tal como en la primera etapa del proyecto DTR-IC, en la actual realizarán diversas rutas de aprendizaje en conjunto, aplicando esta herramienta diseñada y validada por Procasur como un innovador sistema de aprendizaje en campo. **VER MÁS.**

Universidad de Manchester apoyará formación de profesores latinoamericanos

El Instituto Brooks para la Pobreza Mundial de la Universidad de Manchester, presidido por el Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, firmó un convenio con Rimisp para colaborar en el diseño y coordinación del componente de formación de postgrado dentro del programa Dinámicas Territoriales Rurales. Con este convenio, profesores latinoamericanos podrán acceder a becas para pasantías de capacitación en universidades extranjeras. **VER MÁS.**

Rimisp inicia mapeo de dinámicas territoriales en 11 países latinoamericanos

El programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp ha emprendido proyectos de investigación sobre "Mapeo de Dinámicas Territoriales" en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia, Bolivia y Brasil, los que generarán datos pertinentes a la distribución de activos, capital social, crecimiento, etc. En Chile, Perú, Nicaragua y Ecuador ya concluyó el mapeo, por lo que se realizarán estudios para identificar los efectos que han tenido las dinámicas territoriales en la población local. **VER MÁS.**

Diversificación de actores y temáticas para el desarrollo territorial

La riqueza arqueológica de la costa norte de Perú

Raúl Hernández

¿Puede el patrimonio cultural convertirse en eje de procesos locales de desarrollo territorial rural? Las experiencias llevadas a cabo en las zonas de Sipán, Túcume, la Campiña de Moche y Magdalena de Cao así lo demuestran. El proceso de desarrollo territorial implementado en estas zonas busca reactivar los tremendos valores patrimoniales de los países andinos en favor de mejorar el nivel de vida de las comunidades más pobres de la región.

Perú se ha convertido en los últimos años en un destino turístico privilegiado. La oferta ya no se concentra únicamente en los destinos habituales como Cusco o Machu Picchu, sino que incluye otras regiones hasta hoy menos conocidas. La razón, en buena medida, hay que buscarla en los nuevos y espectaculares descubrimientos arqueológicos ocurridos en todo el país. En Sipán, Túcume, la Campiña de Moche y Magdalena de Cao la puesta en valor del patrimonio ancestral se ha convertido en la principal esperanza de autoridades y pobladores para mejorar su nivel de vida. ¿Hasta qué punto ha sido así? ¿Cómo puede el patrimo-

Basado en el informe final del proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural, llamado "Huacas de la costa norte (Perú)", desarrollado en el año 2007 por un equipo del Instituto de Estudios Peruanos integrado por Carolina Trivelli, Raúl Hernández, Sofía Vera y Rafael Nova. La versión completa del texto puede consultarse [aquí](#).



Foto: José Canziani

Una de las claves del proceso ha sido recuperar la iconografía tradicional de las zonas intervenidas. En el escudo de la Municipalidad de Moche, por ejemplo, se incorporó el rostro del dios Ai'paec o degollador.

Ubicación de las regiones La Libertad y Lambayeque, en la costa norte de Perú



Imagen: Google Earth

Si quiere saber más sobre el proyecto ejecutado en la Campiña del Moche, visite el mapa interactivo [aquí](#).

¿Cómo puede el patrimonio arqueológico contribuir al desarrollo de las comunidades rurales de la costa peruana? Éstas son algunas de las preguntas que abordan los investigadores del Instituto de Estudios Peruanos bajo la dirección de Carolina Trivelli.

Los actores del patrimonio

El primer resultado de los descubrimientos arqueológicos es una reordenación del espacio circundante. Las expectativas que genera la puesta en valor de los hallazgos derivan en una concepción del territorio cuyo nuevo eje son los monumentos y sus vías de acceso. La transformación es más profunda en los casos donde la puesta en valor sigue una estrategia planificada y consciente, como ocurre en la Campiña de Moche, escenario desde los años noventa de un trabajo conjunto entre múltiples actores públicos y privados.

Un papel central en estos procesos corresponde a los arqueólogos encargados de la conducción de las excavaciones, quienes desde el principio se involucran en la tarea de hacer partícipe a la comunidad, generando un ambiente de confianza recíproca y colaboración en los esfuerzos por promocionar el patrimonio cultural local. Los arqueólogos son una de las claves para el éxito de los proyectos, como intermediarios entre la comunidad y los ámbitos académico y turístico. La mayoría de las veces se trata de profesionales jóvenes, procedentes de universidades del norte del país, profundamente comprometidos con el desarrollo local. Su actuación permite canalizar fondos públicos y privados hacia los proyectos y mantener viva en la población la inquietud por el patrimonio cultural y su conservación. Las antiguas culturas mochicas y lambayeques se convierten en



Foto: Rafael Nova Arizmendi

El proceso de apropiación se refuerza mediante actividades participativas que ponen en contacto a la población con su patrimonio cultural ancestral.

motivo de orgullo, en testimonio de arraigo en el territorio, símbolo de una historia milenaria, que entroncaría pasado y presente.

En este proceso de apropiación también juegan un papel decisivo los profesores de escuela y las autoridades locales. Los profesores, desde las escuelas en su trabajo con los alumnos y fuera de ellas como personajes respetados de la comunidad, difunden los descubrimientos científicos en un lenguaje comprensible y apropiado para la población local. Esta tarea se refuerza mediante actividades participativas, que ponen en contacto a la población con su patrimonio cultural ancestral, recreándolo y actualizándolo: concursos de artesanía, representaciones de danzas tradicionales, recreaciones de escenas históricas, disfraces, recorridos por los monumentos, etc.

Los arqueólogos son una de las claves para el éxito de los proyectos, como intermediarios entre la comunidad y los ámbitos académico y turístico.

Las autoridades locales, por su parte, contribuyen al proceso de apropiación. Al incorporar la iconografía de inspiración prehispánica en la simbología institucional, generan marcadores culturales que sirven para reforzar y posicionar mejor la nueva identidad colectiva. El rostro del dios Ai'apaec o degollador, por ejemplo, ha sido incorporado en el escudo de la municipalidad de Moche; aparece en el mobiliario urbano, adornando instituciones públicas y negocios turísticos. Lo mismo ocurre en Túcume con el "ave mítica" de la cultura Lambeyque, que floreció en la zona entre los años 1.100 y 1.500 después de Cristo.



Foto: Carolina Trivelli

Los descubrimientos arqueológicos han sido aprovechados para potenciar un desarrollo comercial en las zonas en las que se insertan.

Sin embargo, la reordenación del territorio circundante y la consiguiente evolución en cuanto a las nociones de pertenencia de la población no siempre se producen de la misma manera. Las estrategias de puesta en valor del patrimonio local condicionan desde el primer momento los resultados del proceso. En el caso de Sipán, por ejemplo, la espectacularidad de los descubrimientos determinó la intervención de las autoridades del gobierno central. El Señor de Sipán se convirtió rápidamente en un ícono del Perú reconocido en todo el mundo. Sin embargo, la fama significó también la pérdida del referente local, generándose grandes descontentos entre la población, que se sintió excluida del proceso y percibió la acción del Estado como una apropiación injusta y autoritaria de su patrimonio.

Las capacitaciones animan a los artesanos a apropiarse creativamente de la iconografía prehispánica, para generar sus propios diseños, que incorporan equilibradamente elementos tradicionales y modernos.

Nuevos productos y servicios

En la Campiña de Moche, los diestros artesanos locales han sabido aprovechar la iconografía de los huacos mochicas para elaborar productos artesanales atractivos para los visitantes. Lo mismo ocurre en Túcume y, de manera incipiente, también en Magdalena de Cao. Para reforzar el atractivo de los productos, los talleres han sido acondicionados para transmitir a los visitantes la idea de una continuidad entre el pasado y el presente: el mobiliario, la decoración externa de los locales e incluso la presencia de “perros calatos”, animal característico de la costa peruana, contribuyen a

reforzar esta idea. La misma iconografía de origen prehispánico ha sido aprovechada, también, para adornar y ambientar restaurantes y ramadas campestres. El reto consiste en evolucionar desde productos de baja calidad y estandarizados hacia otros novedosos, originales y atractivos para el consumidor urbano y el turista.

Las capacitaciones animan a los artesanos a apropiarse creativamente de la iconografía prehispánica, para generar sus propios diseños, que incorporan equitativamente elementos tradicionales y modernos. Se evitan así las reproducciones rígidas y estereotipadas. Algunos artesanos incluso han comenzado a construir su propia imagen de marca personal, basada en diseños individualizados y acabados de calidad.

Como complemento a la capacitación, se busca facilitar el acceso de los productores a los consumidores finales. Se ha promovido la participación de artesanos en ferias y exposiciones en Trujillo, Chiclayo y Lima, con el objetivo de relacionarse con otros eslabones en la cadena de comercialización, aumentando los márgenes de beneficio de los productores. En Túcume, los artesanos locales cuentan con un local dentro del mismo museo del sitio, donde exponen y venden sus productos. En Magdalena de Cao, la intervención de una ONG ha permitido alquilar una antigua casona del siglo XIX, que será destinada a la exposición y venta permanente de los productos locales. En la campaña de

Moche, la red de artesanos Manos Míticas en la actualidad está gestionando la apertura de un local similar.

El manejo adecuado del entorno que rodea los monumentos también ha dado buenos resultados. La idea es que los turistas no se limiten a visitar los monumentos, sino que prolonguen su estancia, haciendo uso de otros servicios proporcionados por la población local. Así, la Campaña de Moche se ha

convertido en uno de los centros recreativos por excelencia del sur de Trujillo. Un actor clave para lograr estas mejoras ha sido la Fundación Backus, que contribuye a la mejora de los negocios de la zona mediante la donación de pintura para mejorar los establecimientos de mayor atractivo para los visitantes. Las casas no presentan ahora el aspecto deslucido y triste que es común en muchas poblaciones rurales costeñas. En Túcume, el Museo del Sitio ha combinado los atractivos puramente arqueológicos con paseos por amplias zonas de bosque seco, con aves autóctonas y hermosos paisajes. Se ha apelado, además, a actividades relacionadas con la historia y las tradiciones de la localidad, como la danza de diablillos y otros pequeños museos locales, como el que guarda los restos del reconocido brujo norteño Santos Vera.

La gastronomía también es un elemento que contribuye a reforzar la oferta turística. La gran reputación de la cocina norteña ha facilitado la multiplicación de negocios dedicados a este rubro:

La idea es que los turistas no se limiten a visitar los monumentos, sino que prolonguen su estancia, haciendo uso de otros servicios turísticos de la población local.

restaurantes turísticos; establecimientos de menor categoría, denominados “ramadas”, que sirven comidas a los pobladores locales y a turistas de menores recursos; y “bulevares gastronómicos”, que agrupan a cocineros individuales y comparten un mismo espacio para el consumo de los productos.

En el camino del desarrollo territorial

El estudio de caso, que fue realizado por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), formó parte del programa Desarrollo Territorial con Identidad Cultural, coordinado por Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural con el auspicio de la Fundación Ford. El proyecto del IEP tenía como objetivo analizar en qué medida el patrimonio cultural puede convertirse en un activo para las poblaciones circundantes, susceptible de generar nuevas oportunidades de desarrollo. Esto implicaba analizar los procesos de apropiación cultural y reinención de identidades vinculadas a la puesta en valor de los monumentos arqueológicos, así como los efectos dinamizadores de estos procesos en cuanto a oportunidades económicas, sociales y políticas.

Un primer elemento de reflexión apunta al marco de referencia de los análisis. Mientras en Sipán observamos un proceso de “nacionalización” de los descubrimientos, que ha diluido la

vinculación con una identidad local específica, en otros casos se ha optado por resaltar la vinculación de los monumentos con la identidad local. Desde el punto de vista de las políticas de desarrollo esto implica una decisión de fondo, donde todas las opciones tienen elementos positivos y negativos. ¿Quién debe resultar el principal beneficiario con la puesta en valor de los monumentos? ¿Se debe priorizar la potencialidad dinamizadora de los descubrimientos a escala regional o nacional o, por el contrario, se debe dar prioridad a un impacto más profundo en los espacios locales? En última instancia, ¿a quién le “pertenece” el patrimonio: a la comunidad local, a la regional o a la nación? Éstas son cuestiones que no tienen una respuesta sencilla. Pocas veces se presentan de manera abierta, pero subyacen en todo momento en la toma de decisiones asociada a la puesta en valor del patrimonio arqueológico.

Gracias a la puesta en valor del patrimonio local, la población puede obtener diversos beneficios. Por ejemplo, aumento del valor de sus propiedades o multiplicación de las posibilidades de negocios.


Otro tema importante es la no linealidad de los procesos de desarrollo territorial. Cada caso presenta ritmos diferentes. De manera general podemos hablar de cuatro etapas: conversión del patrimonio cultural en una marca reconocible más allá del ámbito local, apropiación de esta marca por parte de los pobladores locales, desarrollo de productos y servicios con identidad cultural ligados a la marca y, finalmente, la rentabilización de estos productos y servicios en el mercado. Pero no se trata necesariamente de etapas sucesivas en un plano temporal lineal;

pueden desarrollarse de manera paralela o incluso invertir su orden, de acuerdo con las características de los actores involucrados y los contextos locales.

La población puede obtener beneficios en momentos diferentes. Podemos encontrar, como ocurre en Moche, un aumento del valor de las propiedades en las dos primeras etapas del proceso, vinculado con la apertura de la nueva carretera y la habilitación y decoración de las viviendas con motivos tradicionales. Pero podemos encontrar también un impacto positivo en la tercera y cuarta etapas, con la multiplicación de las posibilidades de negocios derivada del mayor flujo de turistas interesados en el monumento arqueológico y en otros productos y servicios que se ofrecen en los territorios.

Otro tema que hay que considerar es la relación entre actores externos y locales. Las experiencias analizadas por el IEP parten de una intervención externa, que da comienzo a los procesos. La intensidad de esta intervención, las condiciones sobre las que se lleva a cabo y la capacidad de respuesta de la población local son los elementos que determinan el grado de éxito o fracaso de las iniciativas. Si bien en todos los casos de trata de proyectos liderados por arqueólogos locales, el soporte institucional, las relaciones con la empresa privada, con el estado central, con investigadores del extranjero y la capacidad de movilizar recursos financieros han sido muy distintos en cada lugar, al igual que la capacidad de entablar relaciones con los actores locales y de insertarse en procesos en marcha.

Un factor clave es el compromiso de los arqueólogos que dirigen los proyectos. En realidad, los casos estudiados demuestran que éste es el elemento que determina si existen o no posibilidades de iniciar el camino que va de un descubrimiento arqueológico a un proceso de desarrollo territorial. De ellos depende la adopción de estrategias e iniciativas tendientes a involucrar a la población en los procesos, a conducirla y a encontrar un sentido último a los procesos de puesta en valor del patrimonio cultural. Los cuatro casos estudiados nos proporcionan ejemplos de arqueólogos que han convertido su trabajo en un proyecto de vida, involucrándose en la problemática de las poblaciones locales y apostando por el desarrollo local aun a costa de perjudicar o dejar escapar ocasiones importantes de su vida académica. De ellos es, en gran medida, la responsabilidad del éxito de los proyectos.

Donde no existe el compromiso de los arqueólogos de llevar adelante un modelo de trabajo que involucre a la población en la puesta en valor del patrimonio cultural, este proceso no tiene lugar. Pero, al mismo tiempo, el compromiso personal de los arqueólogos tampoco es una condición suficiente. Para que comience a transitarse el camino del desarrollo territorial, es necesario un compromiso institucional sostenido, sea público o, en la práctica, más frecuentemente privado. Debido a las frágiles condiciones de la institucionalidad estatal en países como Perú, estas instancias pueden dotar a los esfuerzos de mayor sostenibilidad, para que no pesen de manera tan fuerte las exigencias de resultados inmediatos, que agobian y condicionan a las autoridades locales de las pequeñas poblaciones rurales de la costa peruana. 

El país rural

Muy recientemente asistí en Colonia, Alemania, a un seminario de la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, bajo el título “Modalidades innovativas para la provisión de servicios a las zonas rurales”. En ella, se analizó cómo podía apoyarse a las zonas rurales para que participen plenamente en los procesos de desarrollo, y cómo asegurar también que los habitantes del campo tengan los mismos derechos ciudadanos que la gente de las ciudades.

Vale la pena recapitular algunas de las grandes conclusiones del evento. En primer lugar, la idea de que hay que aceptar la complejidad y la heterogeneidad de las zonas rurales, sus variadas demandas y necesidades, pero también las diversas formas en que pueden contribuir al desarrollo de un país. No hay soluciones ni recetas únicas que puedan aplicarse. En segundo lugar, la idea de que los servicios a las zonas rurales no pueden ser exclusivos para ellas, sino que tienen implicaciones urbanas y muchas veces globales, como lo demuestra el gran debate sobre biocombustibles o alimentos.

En tercer lugar, que para prestar servicios, siempre hay que lograr un balance entre eficiencia y equidad. Desde el punto de vista del mero análisis de costos, prestar servicios a las zonas rurales implicaría no prestárselos a gente que vive en áreas remotas, por su alto valor. Pero si queremos equiparar los derechos ciudadanos, proceder con el criterio anterior implicaría convertirlos en ciudadanos de segunda.

En cuarto lugar, que la construcción de infraestructura en las zonas rurales, carreteras y comunicaciones, son una condición necesaria, pero no suficiente. Es fundamental apuntalar el desarrollo de las zonas rurales, fortalecer la educación, para que la infraestructura se convierta en caminos de desarrollo y no solamente en vías de emigración. En quinto lugar, que hay zonas rurales que pueden utilizar activos locales para el desarrollo que muchas veces implican una elección sobre formas de vida. Ser rural es también, en muchos casos, no querer ser urbano.

En sexto lugar, que el desarrollo de las zonas rurales requiere modalidades institucionales que van más allá de la acción de los ministerios sectoriales;



Foto: Carlos Díaz, Rimisp


Manuel Chiriboga

Investigador Principal
de Rimisp-Centro
Latinoamericano para el
Desarrollo Rural
Ecuador

en otras palabras, los ministerios de agricultura son insuficientes para promover el desarrollo rural. Se requiere de otras carteras gubernamentales, pero sobre todo unas formas de coordinación entre ellas, los gobiernos locales, los actores privados y no gubernamentales. Esto no quiere decir que los responsables nacionales se desentiendan, sino que es necesario una buena mezcla de acciones generales y otras que son específicas de cada zona.

Pero tal vez la conclusión más importante fue que el costo de no hacer nada o hacer poco es enorme. Emigración y vaciamiento de las zonas rurales, impactos ambientales, encarecimiento de alimentos, pero también pérdida cultural y de identidad son los efectos de no hacer nada. Las zonas rurales, se dijo, son una fuente de desarrollo nacional. Por ello, una idea compartida fue la necesidad de llegar a un pacto entre las ciudades y sus zonas rurales, en que

las primeras reconozcan los papeles centrales que tienen las segundas, en términos de alimentación, medio ambiente e identidad, y que estén dispuestas a pagar en algo esos servicios.

Lo increíble es que estas reflexiones fueron hechas por representantes de los países más ricos del mundo, reagrupados en la OECD. Nosotros, como países en desarrollo, debemos tener ese sentido de urgencia respecto a nuestros propios territorios rurales. ¿Pero realmente le damos esa atención y prioridad? Me parece que temas como el cambio climático y los servicios ambientales que prestan las zonas rurales, el aumento mundial de los precios de los alimentos que repercute en el bienestar de miles de personas pero también en la popularidad de los gobiernos, y el tema de los biocombustibles, abren enormes posibilidades para introducir esta discusión en nuestros países 

Las zonas rurales son una fuente de desarrollo nacional. Por ello, existe la necesidad de llegar a un pacto entre las ciudades y sus zonas rurales, en que las primeras reconozcan los papeles centrales que tienen las segundas.

Los nuevos desafíos para el desarrollo rural en América Latina

Territorializar es la consigna

Valeria Vilardo

A partir del análisis de datos sobre ingreso, pobreza y desigualdad en algunos países de la América Latina rural, una investigación propone estimular los flujos de inversión público-privada y, sobre todo, "territorializar" dichos flujos. Esto implica "desagriculturizar" las políticas rurales, fortalecer los vínculos entre las empresas, reforzar los lazos con el mundo urbano y reformar la arquitectura institucional de los gobiernos locales, entre otras medidas.

"A pesar de las tasas importantes de crecimiento económico registradas en América Latina, lo que no se puede discutir es la poca efectividad de las políticas de desarrollo rural impulsadas en las últimas décadas. En la búsqueda de nuevas respuestas, en los años recientes ha cobrado fuerza el debate sobre el enfoque territorial del desarrollo rural". Con esta consideración empieza el documento "La desigualdad y la pobreza como desafíos para el desarrollo territorial rural". La investigación, de Alexander Schejtman y Julio Berdegué, investigado-

Basado en el documento de trabajo "La desigualdad y la pobreza como desafíos para el desarrollo territorial rural", escrito por Alexander Schejtman y Julio Berdegué. Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 2007. Disponible **aquí**.



Foto: Ximena Sanclemente

Para potenciar las zonas rurales, es necesario fortalecer sus vínculos con el mundo urbano, tomando en cuenta el espacio propiamente agrícola y sus relaciones con los pueblos y ciudades.

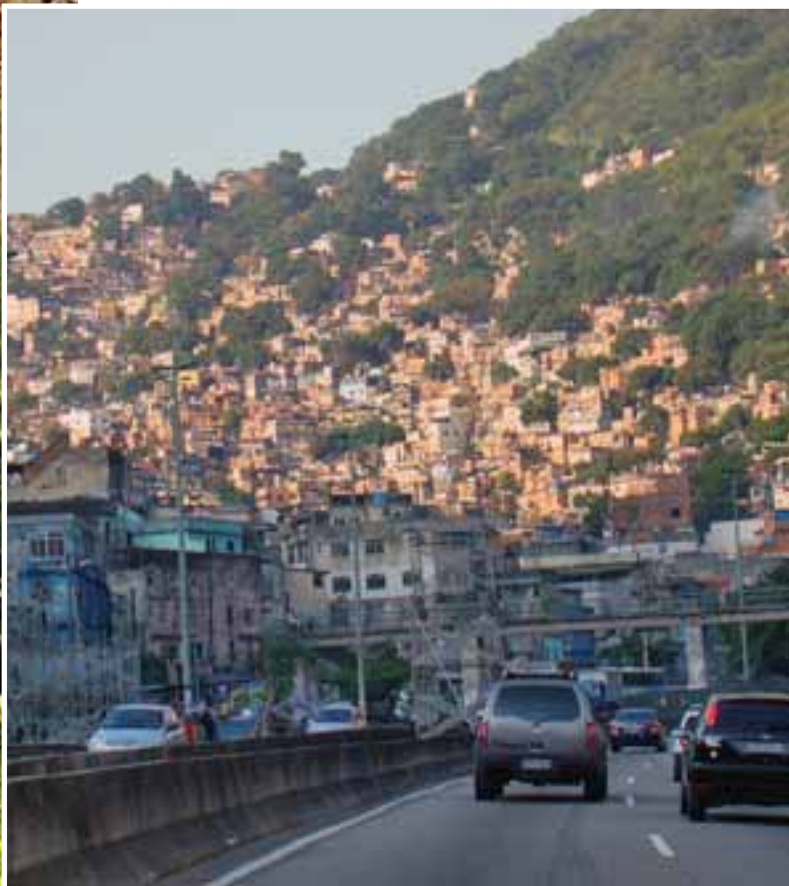


Foto: ©Rocinha - www.flickr.com

Una de las recomendaciones de los investigadores es “desagriculturar” las políticas rurales. Esto podría contribuir a “territorializar” el flujo de inversiones en las zonas rurales latinoamericanas.

res de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, analiza la desigualdad que se presenta en la distribución del ingreso y la pobreza en América Latina, con miras a proponer acciones de desarrollo territorial rural.

Como señalan los investigadores, este documento “quiere proporcionar líneas de acción que se incluyan a la hora de formular políticas y programas de desarrollo rural, a fin de incidir en la disminución de la pobreza y desigualdad rural en América Latina”. Entre estas líneas de acción, los investigadores destacan la importancia de estimular la inversión pública y privada, la territorialización de dichos flujos y la modificación de los marcos institucionales.

Ingreso, pobreza y equidad rural

En primer lugar, el documento analiza la evolución de la desigualdad en la distribución del ingreso entre el 1990 y el 2004, evidenciando que Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y República Dominicana continúan mostrando índices de Gini¹ de concentración de ingreso rural superiores al coeficiente 0,5, lo que significa que dicha concentración se mantiene alta en un segmento reducido de la población rural. Según datos de la Comisión Económica y Social de la ONU (CEPAL), existe una ligera mejoría en Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú en distribución del ingreso rural.

Los investigadores indican que con un mejoramiento del 5% del coefi-

¹ El Coeficiente de Gini se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1, donde 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 a la perfecta desigualdad.



Foto: Valeria Vilardo

La investigación descubrió que, de los 16 países estudiados, 12 tienen tasas de incidencia de la pobreza rural superiores al 50%.

ciente de Gini de distribución de ingresos, todos los países acelerarían la reducción de la pobreza. Si no se mejora la distribución del ingreso, Bolivia, Honduras, Colombia, Guatemala, Venezuela, Nicaragua y Ecuador no lograrán cumplir la meta del milenio de reducir en un 50% la extrema pobreza para el año 2015.

Chile, Costa Rica, Brasil y Guatemala son los países que más han reducido la incidencia de la pobreza rural.

En segundo lugar, la investigación examina los niveles de pobreza rural y urbana, indicando que de los 16 países estudiados, 12 tienen tasas de incidencia de la pobreza rural superiores al 50%, y 11 de ellos además tienen un 25% o más de su población rural viviendo bajo condiciones de extrema pobreza. La pobreza, de hecho, es más profunda en las zonas rurales que en las urbanas. Aún en países donde la mayoría de la población es urbana (como Brasil, Colombia, México y Perú), la mayor parte de los extremadamente pobres viven en regiones rurales.

Una comparación de datos entre los años 2002 y 2005 muestra que durante el período hubo una disminución moderada de la incidencia de la pobreza y una fuerte caída del 5% de la incidencia de la extrema pobreza. En este contexto, Julio Berdegué observa que estas cifras se podrían identificar como un cambio de tendencia preliminar: "Aunque deberemos esperar dos o tres años más para ver si estos datos marcan una tendencia a mediano plazo, consideramos un aspecto positivo que al menos se haya detenido el ciclo de agravamiento de la situación social de América Latina rural".

En relación a la pobreza urbana, el estudio compara el 2005 con el año 1980 y demuestra que el número de pobres urbanos se ha más que duplicado y el de indigentes urbanos ha aumentado en un 80%. En cambio, el número de pobres rurales se ha reducido de un 59,9% a un 58,8% en 25 años (ver tabla “Magnitud e incidencia de la pobreza e indigencia en América Latina entre 1980 y 2005”). Como afirman los investigadores, esta variación se debe en gran parte a la “expulsión de población pobre”, es decir, a que los altos flujos migratorios desde el campo a la ciudad han continuado en la región como estrategia para salir de la pobreza.

En tercer lugar, el estudio examina la distribución regional de la pobreza y de la desigualdad. Los investigadores lamentan que no existan estudios que permitan un análisis comparativo de este fenómeno a escala territorial, y se basan en un análisis de encuestas de hogares hechas entre el 1995 y el 2002 en Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú. Este análisis busca comparar los cambios a escala regional de tres indicadores: ingreso autónomo de las personas rurales, incidencia de la pobreza rural y distribución del ingreso.

Los resultados de esta investigación evidencian que solamente una cuarta parte de la población de estos países vive en regiones que han experimentado un mejoramiento relativo a la media rural nacional en ingreso, distribución del ingreso y pobreza; alrede-

dor del 40% de la población rural vive en regiones que han registrado un retroceso en dos o más de esos tres indicadores. “La concentración espacial del bienestar se hace evidente si se considera que la mayoría rural de la población que ha mejorado en los tres indicadores respecto a la media rural vive en Brasil y Chile, y que sólo 15 de las 63 regiones rurales consideradas han mejorado en los tres indicadores”, señala Alexander Schejtman.

Magnitud e incidencia de la pobreza e indigencia en América Latina entre 1980 y 2005

| Variable | Magnitud (millones de personas) | | Incidencia (porcentaje) | |
|-----------------------------|------------------------------------|-------|----------------------------|------|
| | 1980 | 2005 | 1980 | 2005 |
| Pobres | | | | |
| Rurales | 73,2 | 74,7 | 59,9 | 58,8 |
| Urbanas | 68,4 | 147,0 | 29,8 | 34,1 |
| Pobres no indigentes | | | | |
| Rurales | 33,2 | 33,4 | 27,2 | 26,3 |
| Urbanas | 44,1 | 102,6 | 19,2 | 23,8 |
| Pobres indigentes | | | | |
| Rurales | 40,0 | 41,3 | 32,7 | 32,5 |
| Urbanas | 24,3 | 44,4 | 10,6 | 10,3 |

Fuentes: http://www.eclac.cl/celade/proyecciones/basedatos_BD.htm

Cada zona, un territorio específico

Tomando en cuenta las consideraciones reportadas precedentemente, la investigación propone impulsar acciones concretas respecto de la pobreza y la desigualdad desde las políticas y programas de desarrollo territorial local.

Como primera línea de acción, los expertos proponen estimular los flujos de inversión pública y privada hacia los territorios más afectados, con la finalidad de incrementar la dotación de activos tangibles e intan-

gibles. Asimismo, los investigadores reconocen la limitación de las inversiones en los territorios latinoamericanos más pobres y con mayores niveles de desigualdad respecto a otras regiones y programas en el mundo. "Las regiones más pobres reciben mucho menos inversión pública que las regiones más ricas, y la inversión privada es casi totalmente ausente de estos espacios", explica Berdegué. "Un ejemplo de uso productivo de aplicaciones del enfoque territorial es la iniciativa europea Leader+, organizada bajo lógicas que aseguran los equilibrios socioeconómicos regionales", añade el experto.

Para cambiar esta tendencia, la primera tarea que identifica el estudio consiste en incidir para que estos flujos de inversión pública y privada se incrementen en los territorios rurales pobres.

De los 16 países estudiados, 12 tienen tasas de incidencia de la pobreza rural superiores al 50%, y 11 de ellos además tienen un 25% o más de su población rural viviendo bajo condiciones de extrema pobreza.

Para lograr este objetivo, es necesario crear las condiciones favorables que incentiven la inversión privada y canalizar los intereses de la inversión pública en la mejora de las condiciones humanas, sociales, financieras y naturales de los hogares pobres, en el marco de un ambiente competitivo.

La segunda línea de acción es "territorializar" el flujo de las inversiones. El desafío que plantea el estudio es que se logren equilibrar o complementar las lógicas sectoriales para que se incluyan las especificidades básicas del territorio (condicionantes geográficas,

institucionales y constelaciones de actores sociales). En este contexto, los autores enuncian distintas dimensiones para poder actuar en esta lógica.

En primer lugar, es necesario "desagriculturalizar" las políticas rurales. "Solo una pequeña fracción de los pobres rurales vive exclusivamente de agricultura. La mayoría recurre a otras estrategias para mejorar su condición de vida, como el empleo rural no agrícola, la migración y las remesas, y las estrategias de pluriactividad. Esto no quiere decir no atender a la agricultura, sino que no es importante no hacerlo a expensas de los demás sectores que hacen parte de la economía del territorio", puntualiza Schejtman.

En segundo lugar, es necesario fortalecer los vínculos intersectoriales involucrando a la micro, pequeña y mediana empresa localizada en el territorio, para que los bienes y servicios no sean provistos exclusivamente por empresas externas.

Tercero, el documento destaca la importancia de reforzar los vínculos urbano-rurales, tomando en cuenta el espacio propiamente agrícola en sus relaciones con los núcleos urbanos, y tratando de no separar estos dos ámbitos, que están estrechamente conectados. Además, los investigadores enfatizan el valor de utilizar y visibilizar los bienes intangibles, como el patrimonio cultural y las peculiaridades propias de algunos territorios rurales latinoamericanos. Esta tercera línea de acción se refiere a la transformación institucional, que se puede fomentar a través de la creación de un actor cuyo propósito sea representar al territorio como tal para que se incluyan los sectores rurales más pobres y tradicionalmente excluidos en el diseño e implementación de políticas públicas.

En esta línea de acción, los autores analizan la importancia de reformar la arquitectura institucional del territorio. Esto se logra

con la presencia y calidad de cinco elementos: las atribuciones y capacidades de los gobiernos locales en sus dimensiones técnicas, administrativas y políticas; la coordinación, pero también la existencia de controles y equilibrios entre los distintos niveles

de gobierno (nacional, provincial, municipal); las redes y otras formas de asociación entre los gobiernos locales para generar organizaciones de alcance regional capaces de emprender las tareas de la transformación productiva que, por regla general, sobrepasan a las posibilidades de gobiernos municipales ais-

lados, sobre todo en los territorios más pobres; las organizaciones económicas y de representación de la sociedad civil y, de manera muy especial, las redes o coaliciones que vinculan a agentes diferentes entre sí; y los espacios y mecanismos para la concertación público-privada.


En resumen, el enfoque territorial presenta la oportunidad de construir de manera participativa una mejoría de las condiciones de pobreza, indigencia y desigualdad en América Latina. A través del involucramiento de los diversos actores, como el estado, los gobiernos locales, el empresariado, las ONG y la

En América Latina, la inversión que existe está ordenada por una lógica exclusivamente sectorial y no territorial. El estado decide y opera sectorialmente y los gobiernos locales responden a los incentivos que reciben desde el poder central y también organizan su quehacer con esa perspectiva.

sociedad civil, se pueden proponer programas y políticas públicas que incentiven el crecimiento económico y el flujo de inversiones.

Este cambio puede ser logrado solamente a través de una fuerte voluntad política nacional que incentive la territorialización. Además, es crucial que los nuevos programas y políticas no se enfoquen solamente en

Los resultados de esta investigación evidencian que solamente una cuarta parte de la población de estos países vive en regiones que han experimentado un mejoramiento relativo a la media rural nacional en ingreso, distribución del ingreso y pobreza.

el desarrollo agrario, sino que tomen en consideración la diversificación de las soluciones que los pobres están adoptando para mejorar sus condiciones de vida, y así poder incidir sobre ellas. Los programas y las políticas públicas deben responder al principio de tener más igualdad económica, social, civil, política y de género en el ejercicio de una ciudadanía rural plena 

Crecimiento agropecuario y bienestar

¿Una relación desigual?

Andrea Sanz

Una reciente investigación demuestra que los factores para la disminución de la pobreza, el aumento del ingreso per cápita y su mejor distribución en las regiones rurales más importantes de Chile no tendrían que ver principalmente con el crecimiento agropecuario. Según los autores, estos fenómenos se deben a la mayor incidencia de otros ingresos: los provenientes de empleos no agrícolas, empleos secundarios y subsidios gubernamentales.

¿Ha constituido la agricultura un motor para el desarrollo y la reducción de la pobreza en las zonas rurales? Esta interrogante es el punto de partida del documento “Crecimiento agrícola y pobreza rural en Chile y sus regiones”, desarrollado por Andrea Bentancor, Félix Modrego y Julio Berdegué, investigadores de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.

Basado en la investigación “Crecimiento agrícola y pobreza rural en Chile y sus regiones”, realizada por Andrea Bentancor, Félix Modrego, Julio Berdegué. Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 2008. Disponible [aquí](#).



Foto: Ximena Sanclemente

Una de las primeras constataciones del estudio fue la menor participación del ingreso per cápita agrícola en la composición del ingreso per cápita rural.

El tema de este estudio es el mismo que tratan alrededor de diez investigaciones que se están haciendo en forma paralela en varios países de Latinoamérica, y que serán publicadas por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). “El objetivo es ver en qué medida el crecimiento de la producción agrícola en los países latinoamericanos ha incrementado el bienestar de la población que vive en el medio rural”, señala Andrea Bentancor. Este estudio se enmarca en el proyecto de la FAO Boom Agrícola y Persistencia de la Pobreza Rura, y cuenta con el cofinanciamiento del programa Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp.

Particularmente, en esta investigación realizada en Chile se analizó la relación entre el aumento de la producción agrícola –técnicamente llamada silvoagropecuaria, por considerar recursos forestales, agrícolas y ganaderos–, la reducción de la pobreza y extrema pobreza rurales, y la distribución del ingreso rural.

Más ingresos, menos pobres

La investigación comienza analizando el producto interno bruto (PIB) sectorial, que indica que los volúmenes físicos de la producción agrícola se duplicaron durante el período estudiado (1992-2006), con una productividad media del trabajo que mostró un crecimiento superior al promedio de la economía. Sin embargo, a pesar de esto, la producción no aumentó tan fuertemente en

valor, ya que se vio afectada por el deterioro de los precios de los productos del sector respecto de los del conjunto de la economía. En efecto, el valor de la producción agrícola creció algo más de 20% en términos reales entre 1992 y 2006.

El ingreso per cápita de los hogares rurales mostró un aumento real de un 42%, la incidencia de la pobreza bajó de un 34% a un 12%, y la de la extrema pobreza, de un 10% a un 3%.

Para evaluar si el crecimiento de la producción sectorial se tradujo en mayores ingresos para los hogares rurales, se compararon los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) de los años 1992 y 2006, realizadas por el Ministerio de Planificación Nacional de Chile (Mideplan).

Específicamente, se examinó el comportamiento del ingreso per cápita de los hogares rurales y la participación de las distintas fuentes de ingresos que lo componen: empleo principal (agrícola y no agrícola), empleo secundario, subsidios gubernamentales y otros ingresos. Además, se analizaron los cambios registrados en la distribución de los ingresos rurales y la contribución de cada fuente de ingreso a dicha distribución.

Es importante señalar que los indicadores de pobreza y pobreza extrema mostraron fuertes caídas entre 1992 y 2006 en todas las regiones de Chile, tanto a nivel urbano como rural. De hecho, el ingreso per cápita de los hogares rurales mostró un aumento real de un 42%, superior al que registró el urbano, que fue de un 28%. En el sector rural, la incidencia de la pobreza bajó de un 34% a un 12%, y la de la extrema pobreza, de un 10% a un 3% (ver tabla

Evolución del ingreso, la pobreza y la extrema pobreza en Chile (1992-2006)

| | Ingreso per cápita mensual(*) | | | Pobreza (Incidencia) | | | Extrema pobreza (Incidencia) | | |
|-----------------------|-------------------------------|---------|-------|----------------------|------|-------|------------------------------|------|-------|
| | 1992 | 2006 | Var % | 1992 | 2006 | Var % | 1992 | 2006 | Var % |
| Total de Chile | 108.571 | 142.252 | 31 | 33% | 14% | -58 | 9% | 3% | -64 |
| Total urbano | 116.996 | 149.617 | 28 | 33% | 14% | -57 | 9% | 3% | -64 |
| Total rural | 65.081 | 92.373 | 42 | 34% | 12% | -64 | 10% | 3% | -66 |

(*) Expresado en pesos chilenos de diciembre de 1998.

Fuente: Calculado por los autores en base a la Encuesta Casen.

“Evolución del ingreso, la pobreza y la extrema pobreza en Chile (1992-2006)”. En el primer quintil (el de menores ingresos), el ingreso per cápita rural registró un incremento de un 46%, desde \$19.603 en 1992 a \$28.558 en 2006, medidos en pesos de igual valor (equivalentes a 40 y 58 dólares, respectivamente)¹.

Diferencias regionales

Esta investigación se centró en un grupo de regiones del centro-sur de Chile: desde la V (donde se encuentra Valparaíso) hasta la X, más la Región Metropolitana de Santiago. En conjunto, estas zonas concentran el 91% de la producción total del sector.

El investigador Félix Modrego explica: “En este estudio de Chile proponemos una mirada regional, porque consideramos que las dinámicas regionales son importantes. Los mismos procesos, con

¹ La tasa de cambio utilizada fue de 472 pesos chilenos por un dólar, correspondiente a la que existía en diciembre de 1998 (según el Banco Central de Chile).

las mismas políticas en distintas regiones al interior del país, tienen distintos resultados”.

“Se buscó ilustrar la heterogeneidad regional que existe en los efectos distributivos del crecimiento sectorial. La constatación de estas diferencias motiva a pensar en estrategias de desarrollo con un enfoque territorial que complemente a las estrategias nacionales, a las sectoriales y a aquellas focalizadas a nivel de hogares, las cuales claramente han sido insuficientes para garantizar un desarrollo sostenible, homogéneo e inclusivo en el medio rural chileno”, agrega Modrego.

Los autores del estudio comparan dos grupos de regiones. El primero está constituido por tres regiones del centro-sur del país (V, VI y VII) que constituyen una zona exportadora muy dinámica y con fuerte participación de la agricultura comercial empresarial. De hecho, entre 1992 y 2005 el sector agrícola de cada una de ellas creció a tasas de entre 5,7% y 5,9%, superiores a la media del PIB

agrícola nacional, que fue de 4,1%. El segundo grupo está integrado por tres regiones del sur de Chile (VIII, IX y X), en las que la agricultura se orienta al mercado nacional y es de tipo familiar campesina. Aquí las tasas de crecimiento del PIB agrícola fueron de entre un 3,7% y un 1,7%, menores a la media nacional.

Sin embargo, a pesar del mayor crecimiento agrícola en el primer grupo de regiones, ello no implica que sean también más exitosas en las tasas de reducción de la pobreza rural.

Evolución del ingreso per cápita mensual de los hogares rurales (*)

| | 1992 | 2006 | Var % |
|------------------|--------|---------|-------|
| Chile | 65.081 | 92.373 | 42 |
| V Región | 88.022 | 91.896 | 4 |
| VI Región | 66.734 | 85.541 | 28 |
| VII Región | 58.415 | 76.108 | 30 |
| VIII Región | 55.595 | 67.018 | 21 |
| IX Región | 62.719 | 68.687 | 10 |
| X Región | 69.578 | 104.919 | 51 |
| R. Metropolitana | 74.712 | 153.032 | 105 |

(*) Expresado en pesos chilenos de diciembre de 1998. En ese momento, el valor del dólar era de 472 pesos chilenos.

Fuente: Cálculo de los autores en base a la Encuesta Casen.

Al revisar el aumento del ingreso per cápita rural, que durante el período estudiado (1992-2006) fue de un 42% a nivel nacional, sobresalieron una región de cada uno de los dos grupos de regiones: la X en el sur y la Metropolitana en el centro, con un 51% y un 105%, respectivamente. En el otro extremo, las regiones V (del centro) y IX (del sur) mostraron los menores incrementos en este sentido, con un 4% y un 10%, respectivamente (ver tabla "Evolución del ingreso per cápita mensual de los hogares rurales").

Por otra parte, en el comportamiento del ingreso agrícola (1992-2006), que es uno de los componentes del ingreso rural, se aprecia un alza importante en la X Región (12%), que no pertenece al grupo con mayor crecimiento sectorial. La VII Región se mantuvo prácticamente estable con un alza de 1%, y las demás anotaron descensos significativos (ver tabla "Variación de los componentes del ingreso per cápita mensual de los hogares rurales (1992-2006)").

En cuanto a la reducción de la pobreza rural, que a nivel nacional cayó en un 64%, los mayores descensos se presentaron en las regiones V (76%), VI (79%) y Metropolitana (79%), que a su vez registraron caídas en el ingreso agrícola. En cuanto a la distribución del ingreso rural, ésta empeoró (fue más desigual) en la Región Metropolitana y mejoró (fue más equitativa) en la V y VI. En tanto, las regiones VIII (53%) y IX (42%) fueron las que registraron las menores disminuciones en la incidencia de la pobreza y también las mayores caídas del ingreso agrícola. La X región mejoró la distribución del ingreso.

Las regiones V, VI y VII (del centro y centro-sur) registraron un pequeño incremento del ingreso rural, inferior al prome-



Foto: Ximena Sanclemente

Las regiones de Chile mostraron comportamientos muy heterogéneos en cuanto a la distribución de su ingreso per cápita.

dio nacional; sin embargo, experimentaron mejoras en sus indicadores de desigualdad y pobreza rural que superaron la media nacional. Las regiones VIII y IX (en el sur) también anotaron un incremento del ingreso rural inferior al promedio nacional y mejoraron sus indicadores de desigualdad.

No se puede concluir que cuando hay crecimiento económico del sector agrícola esto necesariamente se traducirá en un aumento de los ingresos totales per cápita de los hogares rurales.

En síntesis, al comparar las dinámicas regionales en Chile en un período de 15 años, no se puede concluir que cuando hay crecimiento económico del sector agrícola esto necesariamente se traducirá en un aumento de los ingresos totales per cápita de los hogares rurales; ni siquiera en un aumento de sus ingresos per cápita derivados del empleo agrícola. La relación del crecimiento con la distribución del ingreso rural también varía por regiones.

Félix Modrego aclara: “Lo importante es que no se cumplieron las expectativas que teníamos al inicio del estudio, pues los patrones esperados a partir de los datos sectoriales no se ajustaron a lo observado a partir de las encuestas de hogar. Concretamente, la transmisión del crecimiento sectorial al bienestar de los hogares rurales parece débil y dispar entre regiones geográficas”.

Variación de los componentes del ingreso per cápita mensual de los hogares rurales (1992-2006)

| | Agrícola (*) | No Agrícola (*) | Actividades secundarias | Transferencias gubernamentales | Otros ingresos |
|------------------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------|----------------|
| Chile | -5% | 105% | 73% | 219% | 24% |
| V Región | -17% | 19% | 48% | 93% | 1% |
| VI Región | -11% | 107% | 74% | 184% | 23% |
| VII Región | 1% | 51% | 94% | 195% | 23% |
| VIII Región | -20% | 54% | 37% | 210% | 21% |
| IX Región | -25% | 20% | 47% | 359% | -20% |
| X Región | 12% | 89% | 86% | 302% | 28% |
| R. Metropolitana | -7% | 233% | 109% | 70% | 73% |

(*) Corresponde sólo al ingreso principal.

Fuente: Cálculos de los autores en base a microdatos provenientes de encuestas Casen.

Menos pobres por otras razones

Como se puede observar en la tabla "Variación de los componentes del ingreso per cápita mensual de los hogares rurales (1992-2006)", los subsidios gubernamentales y el rubro "otros ingresos" definitivamente contribuyeron a reducir la pobreza y la extrema pobreza rurales, ya que no sólo subieron el ingreso total sino que también constituyeron una fuerza igualadora en materia de concentración del ingreso rural. Más aún, debe destacarse que los subsidios gubernamentales fueron un componente

importante para explicar el alza del ingreso per cápita rural en las regiones en que la incidencia de la pobreza es mayor (VIII y IX).

En cuanto a la contribución a la desigualdad de los distintos tipos de ingreso, cabe decir que el ingreso no agrícola y el proveniente de la ocupación secundaria operaron como fuerzas concentradoras del ingreso total, tanto en 1992 como en 2006. Por el contrario, el ingreso agrícola y las transferencias gubernamentales contribuyeron a reducir la desigualdad en 1992 y 2006, tanto en el medio rural chileno en su conjunto como en cada una

Los investigadores seguirán analizando el sector rural chileno

Las próximas variables

Para los investigadores de Rimisp, esta investigación es un trabajo en dos etapas. El trabajo analizado en este artículo corresponde a la primera. La segunda etapa de la investigación pretende dilucidar en detalle el comportamiento de la distribución del ingreso y analizar cómo cada una de las fuentes de ingreso contribuye a la desigualdad, para ver qué medidas (subsídios, políticas públicas focalizadas) o factores disminuyeron la pobreza.

“En una segunda etapa del proyecto, tratamos de incluir variables más concretas que determinan la distribución del ingreso y el crecimiento del ingreso promedio e influyen en la reducción de la pobreza, como son la educación, el género, tipos de ingresos, la participación del ingreso agrícola en el ingreso total y empleo rural no agrícola”, agrega la investigadora, Andrea Bentancor.

de las regiones analizadas. El componente “otros ingresos” registró un cambio importante en su contribución a la desigualdad rural: mientras que en 1992 constituía una fuerza concentradora del ingreso per cápita rural, en 2006 contribuyó a la igualdad.

En definitiva, este estudio muestra que otros sectores productivos, distintos al agrícola, y otras fuentes de ingresos, como los subsidios gubernamentales, habrían tenido un impacto mayor en la baja que mostraron la pobreza y la extrema pobreza rurales en el período analizado. Con estos datos, el estudio concluye que el crecimiento sectorial no necesariamente se traduce en mayores ingresos agrícolas o en una disminución de la pobreza; en otras palabras, no hay una relación directa entre crecimiento agropecuario y bienestar social en el medio rural chileno.

De acuerdo a las conclusiones de los investigadores, este fenómeno tiene varias explicaciones:

- Disminuyó la participación del ingreso per cápita agrícola en la composición del ingreso per cápita rural, tanto a nivel nacional como regional.
- Se registraron alzas importantes en el ingreso per cápita no agrícola. Este aumento fue el principal determinante de la expansión total del ingreso per cápita rural tanto a nivel nacional como regional, con la excepción de las regiones IX y X, donde el ingreso proveniente de ocupaciones secundarias tuvo un mayor impacto.
- Los subsidios gubernamentales y el rubro otros ingresos (alquileres, pensiones, rentas al capital, entre otros) contribuyeron a reducir la pobreza y la extrema pobreza rurales, ya que no sólo subieron el ingreso total, sino que

también constituyeron una fuerza igualadora en materia de concentración del ingreso rural. Al respecto, Andrea Bentancor aclara: "Las transferencias gubernamentales bajan la desigualdad de ingresos, porque al inyectar recursos a los más pobres los acercan hacia el promedio. Por el contrario, las actividades secundarias son concentradoras del ingreso, porque quien logra tener estas actividades se aleja del promedio, aumentando la dispersión del ingreso, lo que genera mayor desigualdad".

- Las transferencias gubernamentales fueron importantes en el alza del ingreso per cápita rural en las regiones en que la incidencia de la pobreza es mayor, es decir, la VIII y la IX.

Otro aspecto que hay que considerar es que la ocupación en el sector agrícola bajó en todas las regiones, con excepción de la IX.

No obstante el estudio concluye que el sector agrícola no ha sido la principal fuente del mayor bienestar de los hogares rurales, los autores señalan que existen ciertos elementos que podrían morigerar esa conclusión. Esto porque el peso del sector

El estudio concluye que el crecimiento sectorial no necesariamente se traduce en mayores ingresos agrícolas o en una disminución de la pobreza; en otras palabras, no hay una relación directa entre crecimiento y bienestar en el medio rural chileno.

podría estar subestimado. En primer lugar, explican, la Encuesta CASEN no pregunta la rama de actividad de la ocupación secundaria, y parte de esos ingresos podrían provenir del sector. Además, los encuestados pueden haber declarado que su ingreso provenía de una actividad principal no agrícola, por ejemplo el comercio, pese a que se comercializaran productos agrícolas. Por último, las variables de estudio de esta investigación no consideran los efectos del sector sobre el resto de la economía (industria, comercio y turismo). Además, hay que considerar que existe una subestimación del estrato de empleadores agrícolas, que muchas veces poseen una actividad urbana que declaran como principal y, por ende, la encuesta no capturaría bien su participación en el ingreso sectorial. Éste es un fenómeno potencialmente importante, pues la "urbanización" de los ingresos agrícolas es un fenómeno creciente en el tiempo.

"Si todos estos factores se pudiesen medir bien, quizás descubriríamos que el sector agrícola está colaborando más a la reducción de la pobreza de lo que nosotros detectamos", añade Bentancor 🗨️

Biocombustibles

¿Moratoria o participación?

Los impactos de los biocombustibles sobre la seguridad alimentaria mundial y la integridad de los ecosistemas no se pueden evaluar a partir de la idea de que la producción de energía avanzará fatalmente sobre áreas de producción alimentaria o reservas ambientales no explotadas anteriormente. Este tipo de juicio no tiene en cuenta tres elementos básicos.

En primer lugar, la productividad crece y muchas veces lo hace a un ritmo superior que el de la propia demanda. Actualmente, en Brasil por ejemplo, existen 170 mil millones de hectáreas plantadas de pasturas, con un promedio de una cabeza de ganado por hectárea. El potencial de liberar áreas, a través del aumento del número de animales en estas pasturas, es extraordinario. En 1975, en el Estado de São Paulo se producían 10 litros de alcohol por hectárea cultivada con caña de azúcar, mientras que hoy llegan a 70 litros.

En segundo lugar, no existe solamente competencia, sino también complementariedad entre producción de alimentos y energía. La soya brasileña usada para la producción de biodiésel corresponde

solamente al 18% de un producto cuya mayor parte se destina a harinas para alimentación animal. De la misma forma, ingenieros agrónomos de la State University de Iowa muestran que el balance energético negativo del etanol norteamericano de maíz podría mejorarse considerablemente si se pasara a usar la materia seca en la alimentación del ganado.

Lo más importante, sin embargo (el tercer elemento que la condena sumaria de los biocombustibles subestima), es que estos nuevos mercados de energía no podrán afirmarse internacionalmente mientras no estén acompañados por una rigurosa trazabilidad socioambiental y por un sistema de certificación reconocido.

No obstante, esto no quiere decir que los biocombustibles no conlleven riesgos para las sociedades que los producen (incluso, amenazas globales). En el caso brasileño, nada indica que el etanol represente una amenaza directa a la selva amazónica, pero los 17 mil millones de dólares en inversiones que se han realizado en los últimos dos años, han sido para plantas ubicadas en su gran mayoría en el cerrado (sabana), un bioma poco protegido y de



Foto: Universidad de São Paulo

Por Ricardo Abramovay


Profesor titular de la Facultad de Economía, Administración y Contabilidad de la Universidad de São Paulo, Brasil y coordinador de su Núcleo de Economía Socioambiental (NESA).

gran importancia en el centro-oeste del país. Además, las gigantescas superficies de cultivo continuo de caña de azúcar empobrecen la diversidad de los paisajes rurales, a pesar de los efectos multiplicadores positivos de los innegables avances técnicos en la plantación de caña y en su industrialización.

En el caso del biodiésel, el programa gubernamental dirigido a productos como el tártago (aceite de ricino) y el aceite de palma –cultivados principalmente por sectores menos adinerados de la agricultura familiar– no ha sido capaz, durante su primer año de existencia, de evitar que la oferta de materia prima, se concentrara casi exclusivamente en la soya y, por consiguiente, en agricultores de mayor tamaño. Claro que esto no condena el programa, pero muestra cuán difícil es organizar mercados dirigidos a la participación de los más pobres.

En términos globales, es verdad que la reciente elevación de los precios agrícolas mundiales se puede atribuir, fundamentalmente, al aumento del ingreso y a los cambios en los patrones de consumo de los países emergentes. En 1975, un chino consumía un promedio de 20 kg de carne por año y hoy en día

ha pasado a 50 kg anuales. Incluso así, el uso del maíz para la producción de etanol en EE.UU. ha fortalecido, con toda seguridad, esta tendencia a la elevación de los precios agrícolas. Pero es importante subrayar que no son los biocombustibles en general los que ejercen esta presión, y sí el etanol norteamericano de maíz. No hay evidencia de que el etanol brasileño de caña de azúcar acarree un impacto semejante sobre los precios agrícolas.

La gran novedad en estos mercados está en la participación de un amplio conjunto de grupos de interés (stakeholders) en su organización. Importantes grupos como WWF, Amigos de la Tierra, The Nature Conservancy, entre otros, se acreditan como interlocutores legítimos con un rol decisivo en la certificación de los biocombustibles. Su capacidad de interferir en los mercados y en los procesos productivos no se da de antemano. Pero todo indica que la imposición de criterios socioambientales para la certificación de la bioenergía es un camino más interesante para las organizaciones sociales que la reivindicación genérica de una moratoria en relación con el tema 

Los nuevos mercados de energía no podrán afirmarse internacionalmente mientras no estén acompañados por una rigurosa trazabilidad socioambiental y por un sistema de certificación reconocido.

Guilherme Cassel, Ministro de Desarrollo Agrario de Brasil

“Vamos a **garantizar** a miles y miles de brasileños el **derecho** de poder **aprovechar** el ciclo de **desarrollo** del país”

Paola Ligasacchi

A fines de febrero de 2008, el presidente de Brasil, Lula da Silva, lanzó Territorios de la Ciudadanía, el programa más grande de desarrollo territorial rural en América Latina. Guilherme Cassel, Ministro de Desarrollo Agrario de Brasil, explica que el principal objetivo del programa es superar las condiciones de pobreza que todavía persisten en Brasil, especialmente en el sector rural.

Entre los temas abordados en la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) realizada a mediados de abril en Brasilia, se hizo referencia al programa Territorios de Ciudadanía, orientado a las regiones rurales de Brasil con bajo índice de desarrollo humano (IDH). Esta iniciativa coordina 135 acciones de desarrollo regional y de garantía de derechos sociales, y beneficiará en su primer año de funcionamiento a 60 territorios constituidos

por 958 municipios (un 17% del total) con muy bajos niveles de desarrollo humano.

El programa Territorios de Ciudadanía no se refiere a políticas compensatorias que amenicen los nefastos resultados de la exclusión, sino que busca el desarrollo sostenible con inclusión social y participación igualitaria en la economía. Además, podrá generar un considerable aumento de las acciones e inversiones públicas, así como también posibilitará una coordinación superior entre ellas para



Foto: Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil

Guilherme Cassel, Ministro de Desarrollo Agrario de Brasil: el principal ejecutor del programa Territorios de la Ciudadanía.

las comunidades participantes que ayudará a definir y priorizar las inversiones en cada territorio.

Territorios de Ciudadanía pretende mantener los principios y las líneas de acción del programa de Desarrollo Territorial del Ministerio del Desarrollo Agrario brasileño. Eso significa invertir en infraestructura social y económica; estimular actividades productivas; rescatar los derechos de la ciudadanía; ampliar la disponibilidad de los bienes públicos; formular un plan territorial de carácter participativo que pueda orientar las diversas dimensiones del desarrollo; establecer pactos sociales en los territorios; elaborar proyectos específicos que traduzcan los objetivos del programa en metas concretas; y establecer procesos de control social sobre sus resultados.

EQUITIERRA habló con el Ministro Guilherme Cassel para indagar más en las motivaciones y en los objetivos de esta iniciativa.

¿Por qué el Ministerio del Desarrollo Agrario ha formulado este programa?

¿Nos podría contar cómo nació la idea?

En los últimos años las políticas públicas han

Vamos a crear las condiciones para garantizar el acceso a los derechos y a las políticas públicas y de desarrollo económico a hombres y mujeres que por las más distintas razones fueron condenados a la invisibilidad.

proporcionado un crecimiento más igual y solidario en Brasil. Pero esta dinámica económica y social todavía no ha llegado a todas las regiones del país, especialmente en el sector rural. Es por eso que se ha desarrollado el programa Territorios de la Ciudadanía, una estrategia de desarrollo regional sostenible para superar las condiciones de pobreza, posibilitar (o promover) ciudadanía y mejorar la calidad de vida en las regiones donde aún se concentran las mayores desigualdades sociales y económicas, principalmente en el sector rural. Vamos a garantizar a miles y miles de brasileños el derecho de poder aprovechar el ciclo de desarrollo del país, situación que ha sido negada en otros períodos de nuestra historia.

Esta estrategia empezó a ser desarrollada en

2007 y en su concepción se incorporó la noción de actuación integrada como una forma de buscar más eficacia en las políticas públicas. Los 19 ministerios del Gobierno Federal en Brasil que participan de Territorios de Ciudadanía trabajan en conjunto con los gobiernos estatales y municipales, y con la sociedad de los 60 territorios atendidos en esta primera etapa. Esta actuación conjunta se materializa en los consejos territoriales, donde representantes de las tres esferas gubernamentales y de la sociedad civil son responsables de la elaboración del plan de desarrollo que será implementado en cada región, a partir de una agenda pactada de acciones.

¿Cuáles son los principales objetivos del programa?

El principal objetivo es superar las condiciones de pobreza que todavía persisten en Brasil, especialmente en el sector rural. Para poder alcanzar ese objetivo, las acciones serán desarrolladas a partir de tres ejes estructurantes: apoyo a las actividades productivas, ciudadanía y derechos, e infraestructura.

Con la integración de acciones del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales, y la participación de la sociedad, vamos



Foto: Manoel Marques

En su primer año de funcionamiento, Territorios de la Ciudadanía beneficiará a 60 territorios constituidos por 958 municipios brasileños.

a crear las condiciones para garantizar el acceso a los derechos y a las políticas públicas y de desarrollo económico a hombres y mujeres que por las más distintas razones fueron condenados a la invisibilidad.

El conjunto de acciones integradas de 19 ministerios del Gobierno Federal resultará en inversiones del orden de 6,6 mil millones de dólares americanos en el 2008 en los 60 territorios. Y estas acciones serán reforzadas

con iniciativas de los gobiernos estatales y municipales.

En el ámbito federal, esta situación articulada nos permite combinar distintas acciones: los financiamientos del programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf) con una mayor asistencia técnica; la ampliación del programa Luz Para Todos con la estructuración de actividades productivas; la recuperación de infraestructura de los asentamientos con la ampliación de los programas Bolsa Familia, Salud de la Familia, Farmacia Popular y Brasil Sonriente; la construcción de escuelas con obras de saneamiento básico y construcción de cisternas.

¿Con qué criterios se seleccionaron los territorios que componen el programa?

Los primeros territorios se han seleccionado considerando a los que tienen un menor Índice de Desarrollo Humano (IDH), una mayor concentración de agricultores familiares y asentamientos de la reforma agraria, un bajo dinamismo económico, un mayor número de beneficiarios en el programa Bolsa Familia, de poblaciones quilombolas (comunidades descendientes de esclavos negros), indígenas y pescadores. Es importante destacar el

aspecto federativo de los Territorios de Ciudadanía, ya que todos los estados brasileños tendrán por lo menos un territorio atendido.

En esta etapa estamos beneficiando 60 regiones en todo el país, donde viven más de dos millones de familias de agricultores familiares y comunidades tradicionales. Hasta el 2010, vamos a incorporar un total de 60 territorios.

¿Cuáles son los principales actores e instituciones involucradas en el programa?

Los principales actores son el gobierno federal, los estatales y municipales, y la sociedad. Pero destaco el control social. Esta es una de las grandes innovaciones de Territorios de Ciudadanía. Más allá de la participación de las comunidades beneficiadas en la definición de los proyectos que serán desarrollados, cualquier ciudadano podrá revisar el progreso de las acciones pactadas a partir del sitio web www.territoriosdacidadania.gov.br. El control social es una garantía de transparencia. A través de él, cualquier ciudadano podrá hacer el seguimiento de las acciones y las obras hasta su conclusión.

¿Cuáles son las principales dificultades

El programa Territorios de la Ciudadanía se propone ir mucho más allá que apenas darle el pescado a las familias beneficiadas: tiene como objetivo enseñarle a esas familias a pescar sus propios peces.

y desafíos que tendrá que enfrentar el programa para que se desarrolle exitosamente y alcance sus objetivos?

Nuestro mayor desafío es el carácter pionero de Territorios de Ciudadanía al proponer que la superación de la pobreza rural y el desarrollo regional ocurran a partir de la integración de políticas públicas federales, estatales y municipales con amplia participación de las poblaciones de los territorios atendidos. Esta es una iniciativa compleja, que exigirá una permanente actualización, calificación y perfeccionamiento.

Pero es importante acordarse de que los territorios beneficiados ya contaban con una forma de organización, con amplia participación popular: los colegiados territoriales,

compuestos por representantes de los agricultores familiares, asentados de la reforma agraria, quilombolas, indígenas, pescadores artesanales, representantes de las mujeres trabajadoras rurales y de la juventud rural, así como de organizaciones sociales, representaciones de municipios y órganos gubernamentales. Con Territorios de Ciudadanía, esta base fue ampliada.

Otro elemento importante es el hecho de que los territorios son formados por conjuntos de municipios con características económicas y ambientales similares, con identidad y cohesión social, cultural y geográfica, lo que facilita la planificación de las acciones gubernamentales para el desarrollo de esas regiones.

Algunos críticos señalan que el programa es más bien una iniciativa de desarrollo social y no de desarrollo territorial: según ellos, es débil la participación, por ejemplo, de los ministerios y agencias responsables del desarrollo económico y del área científica y tecnológica.

¿Qué responde usted a esta crítica?

Territorios de la Ciudadanía no es una iniciativa de corto plazo. En esta etapa inicial, incorpora las mayores acciones sociales del

gobierno de Lula. Pero la estrategia central de uno de sus pilares específicos es la inclusión productiva de las familias por medio de acciones de generación de empleo e ingreso. Para que eso ocurra de manera sostenible y duradera, estamos formulando programas con las áreas de investigación, de desarrollo, de apoyo a la comercialización y con ministerios encargados de la formación y la capacitación. Como dice el profesor Ignacy

Sachs, el programa Territorios de Ciudadanía se propone ir mucho más allá que apenas darle el pescado a las familias beneficiadas: tiene como objetivo enseñarle a esas familias a pescar sus propios peces.

Según su criterio, ¿cuáles serían los resultados a largo plazo del programa?

Por ser una iniciativa que tiene como principal objetivo crear condiciones de superación

de la pobreza rural, las regiones beneficiadas serán capaces de, a partir de sus propias iniciativas, dar un salto cualitativo en la promoción del desarrollo sostenible económica y ambientalmente, con generación de empleo e ingresos. Y es eso lo que se hará, tomando en cuenta las características de cada territorio.

Por su tamaño y la importancia política de Brasil, este programa será sin duda seguido con mucho interés por otros países de América Latina. ¿Qué planes existen para facilitar el diálogo e intercambio con otras experiencias y otras políticas de desarrollo territorial de nuestra región?

Tenemos todo el interés en promocionar el intercambio con otros países que incentiven políticas de combate a la pobreza rural. La mayor prueba de ese interés es la actuación integrada que los gobiernos de Brasil y Venezuela planean desarrollar en áreas de frontera entre los dos países, incorporando territorios de ciudadanía del Alto Río Negro y el Bajo Amazonas, que son áreas fundamentalmente indígenas. Formalizamos el compromiso de buscar formas de cooperación técnica a fines de marzo durante el encuentro entre los Presidentes Luiz Inácio



Foto: Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil

Sobre Guilherme Cassel

Guilherme Cassel es brasileño de Río Grande do Sul, tiene 51 años y es casado. Tiene un postgrado en Recursos Humanos. Fue agente fiscal del tesoro del estado de Río Grande do Sul. También ha ejercido los siguientes cargos: subsecretario de Hacienda de Porto Alegre, sub jefe de la casa civil del gobierno del estado de Río Grande do Sul, secretario general del gobierno del estado de Río Grande do Sul y jefe de gabinete del vice gobernador Miguel Rossetto. Entre 2003 y marzo de 2006 fue el secretario ejecutivo del Ministerio del Desarrollo Agrario. A partir de abril de 2006, es Ministro de Estado de Desarrollo Agrario.

Lula da Silva y Hugo Chávez en Recife, estado de Pernambuco.

Hemos recibido solicitudes de diversas agencias e instituciones internacionales interesadas en conocer Territorios de Ciudadanía. Un ejemplo es la Corporación Andina de Fomento, que ya ha manifestado su intención de apoyar acciones de Territorios de Ciudadanía, principalmente de gestión, infraestructura, servicios en los territorios y de

Nuestro mayor desafío es el carácter pionero de Territorios de Ciudadanía al proponer que la superación de la pobreza rural y el desarrollo regional ocurran a partir de la integración de políticas públicas federales, estatales y municipales con amplia participación de las poblaciones de los territorios atendidos.

fomentar estrategias de desarrollo regional. También, ha querido apoyar programas del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), como el Arca de las Letras (implantación de bibliotecas rurales) y el de Documentación de la Trabajadora Rural, así como estudios e investigaciones para promocionar alternativas económicas para regiones atendidas por Territorios de Ciudadanía



Turismo y desarrollo territorial rural en Centroamérica

Claros y oscuros de un proceso acelerado

En Centroamérica, el turismo se está convirtiendo aceleradamente en un importante eje de acumulación para las economías nacionales. Según datos preliminares del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), en 2007 llegaron 7,9 millones de turistas a la región, que dejaron ingresos por 4.343,7 millones de dólares. La estabilidad política de la región, más una variada oferta de recursos naturales y culturales, entre ecosistemas tropicales protegidos, sitios arqueológicos, ciudades coloniales, patrimonio cultural intangible y los más conocidos destinos de sol y playa, permiten que Centroamérica sea un destino turístico en ascenso. A estos atractivos, sin embargo, se contraponen la pobreza y la inseguridad ciudadana que aun prevalecen en la región.

Más allá de las políticas y la institucionalidad oficial, estamos ante un fenómeno imparable, que se mueve en una gama de claros y oscuros, puesto que ofrece oportunidades para el desarrollo de los territorios rurales al estimular la diversificación de estrategias de vida. También representa amenazas debido a los impactos ambientales por el cambio

de uso de suelo, además de conflictos por la inseguridad en los derechos de acceso y tenencia de la tierra, que afecta sobre todo a la población más vulnerable, como las comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.

Las amenazas del turismo se evidencian actualmente en diversos territorios de alto potencial turístico, particularmente en las zonas costeras del Atlántico, como la Bahía de Tela en Honduras y las Bocas del Toro en Panamá. También en la costa del Pacífico: es el caso de Guanacaste en Costa Rica y Tola en Nicaragua, y en zonas vinculadas al Corredor Biológico Centroamericano, como la selva maya en Petén. En estos territorios las organizaciones locales protagonizan movimientos de resistencia y oposición a megaproyectos de turismo y a la dinámica de desarrollo inmobiliario asociada a éste. Son casos donde la conflictividad se despliega en un contexto de inseguridad en los derechos de acceso y tenencia de la tierra, modificaciones al marco normativo que benefician las inversiones extranjeras y, en contraste, débiles o inexistentes marcos de política para la mitigación de impactos ambientales, planificación y ordenamiento del territorio.




Foto: Gentileza de Ileana Gomez

Por Ileana Gómez

Socióloga, investigadora principal y coordinadora pro tempore de la Fundación PRISMA El Salvador

No obstante, el turismo no tiene que ser sinónimo de conflicto o degradación social y ambiental. Es posible manejar el desarrollo de esta área a partir de un diálogo y participación efectiva de los actores implicados: empresas, estado-gobierno local y ciudadanos. Cuando esto sucede, se traduce en la creación de instrumentos de gestión del territorio cimentados en acuerdos y alianzas intersectoriales. Algunas municipalidades como Altagracia y Moyogalpa en la isla de Ometepe en Nicaragua y Suchitoto en El Salvador, entre otras, han sido visionarias y privilegiadas en este sentido, pues han logrado planificar y formar una institucionalidad local lo suficientemente empoderada para marcar la pauta del desarrollo del turismo en forma descentralizada antes que éste arremeta con fuerza. En estos casos, ha habido tiempo de desarrollar un estilo de turismo propio, que propicia la inclusión de los actores locales en el proceso, contribuyendo a mejorar las

condiciones de vida de pequeñas empresas locales y familias campesinas.

Con sus claros y oscuros, el turismo es un fenómeno que está transformando las relaciones sociales y productivas en los territorios centroamericanos a una velocidad que se escapa a la capacidad de gestión de muchas instituciones públicas y agentes privados. Para que el turismo sea un elemento de desarrollo hay que ir más allá de la promoción, comercialización y desarrollo de mercados para los destinos. Si se pretende que el turismo sea una actividad contenida en una estrategia de desarrollo territorial, es preciso avanzar en la participación e inclusión de actores para la creación de un proyecto compartido de turismo, a partir del establecimiento de acuerdos, alianzas intersectoriales, agendas de investigación y la creación de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial descentralizado 

Si se pretende que el turismo sea una actividad contenida en una estrategia de desarrollo territorial, es preciso avanzar en la participación e inclusión de actores para la creación de un proyecto compartido de turismo.

Identidad cultural como factor de desarrollo

La riqueza de Chiloé

María Elena Montory

El archipiélago de Chiloé, ubicado en el sur de Chile, reconocible por su potente identidad local, fue uno de los casos de estudio de una estrategia de desarrollo basada en aprovechar el valor del patrimonio cultural. Este modelo implica articular instancias públicas y privadas para fomentar el aprovechamiento económico de productos y servicios autóctonos. La idea final es que la identidad cultural sea un factor decisivo para reducir la pobreza.

Comprender los factores que podrían impulsar los bienes y servicios con identidad cultural de Chiloé hacia mercados dinámicos, potenciando el desarrollo rural y reforzando su identidad, fue el objetivo de la investigación "Chiloé: una reserva de patrimonio cultural". Realizada por Carlos Venegas, Director del Centro de Educación y Tecnología (CET), Chiloé, junto a los coautores Carolina Schweikart y Alejandro Paredes, se llevó a cabo durante el 2006 en el archipiélago de Chiloé, ubicado en el sur de Chile.

Basado en el informe final del proyecto Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural, llamado "Chiloé: una reserva del patrimonio cultural", desarrollado en el año 2007 por Carlos Venegas, Carolina Schweikart y Alejandro Paredes. La versión completa del texto puede consultarse [aquí](#).

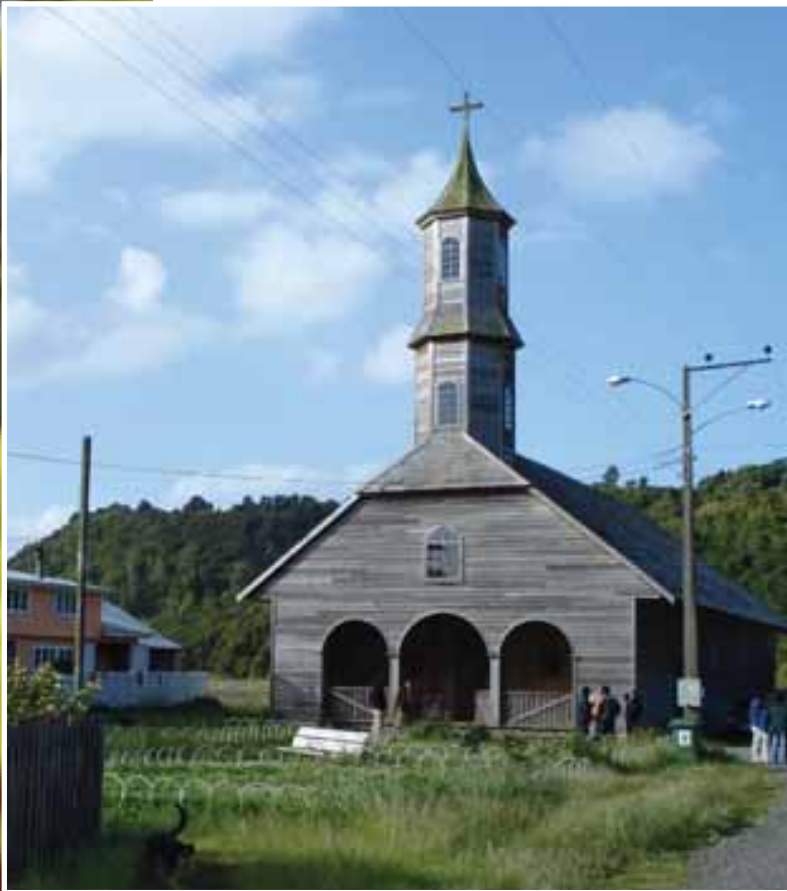


Foto: Ariel Halpern

A pesar de la acelerada industrialización, la comunidad de Chiloé ha mantenido un acervo cultural importante, activos identificables y un sello territorial reconocido.

Chiloé en el contexto chileno

Ubicada en el sur de Chile, esta isla ha sustentado una identidad cultural basada en antiguísimas tradiciones. Esa potencia es la que se ha aprovechado productivamente, como se puede constatar en el “Mapa de productos y servicios con identidad cultural de Chiloé”, que se puede visitar aquí.



Imagen: elaboración de Equitierra - Fuente: Google Earth

Formado por una isla grande y más de 30 islas menores, la población de este lugar alcanza 154.766 habitantes, de los cuales el 44% vive en un entorno rural.

La investigación forma parte del proyecto Desarrollo Territorial a partir de Servicios y Productos con Identidad Cultural (DTR-IC), ejecutado por Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, con el apoyo de la Fundación Ford. Los estudios de caso se desarrollaron, en forma paralela, en los Oasis Mendocinos de Argentina; el Municipio de Concepción en las Misiones Chiquitanas, de Bolivia; en dos territorios en la Serra Gaucha, Brasil; en cuatro territorios vinculados al cultivo del café en México y Centro América (Guatemala, Honduras y Costa Rica); en el archipiélago de Chiloé, Chile; en San Basilio de Palenque, Colombia; en el Municipio Indígena de Cotacachi, Ecuador; y en las Huacas Arqueológicas de la Costa Norte y Valle del Colca, Perú.

“El fenómeno económico no ha sido capaz de hacer desaparecer esa continuidad cultural que existe en Chiloé a nivel de los artesanos, productores agrícolas y los servicios de turismo, y todas son actividades basadas en la identidad cultural”, manifiesta Carlos Venegas.

En su primera etapa, el proyecto estableció un espacio de diálogo y colaboración, contribuyó al conocimiento de distintas estrategias de valorización de identidad cultural y empezó a posicionar esta temática entre instituciones públicas y privadas de desarrollo. Al finalizar el 2007, comenzó



Foto: Carolina Porrás

En el proyecto se han considerado talleres con la comunidad, que han abordado temas como la certificación de origen de la artesanía chilota.

su segunda fase, que busca aportar al diseño y desarrollo de políticas, estrategias y métodos que estimulen la valorización de territorios rurales en base a sus activos culturales, logrando dinámicas sostenibles y posicionando este modelo de desarrollo.

La estrategia de DTR-IC contempla la transformación productiva e institucional de un espacio rural para reducir la pobreza. Así, requiere de una articulación competitiva y sustentable con mercados dinámicos, de cambios en los patrones de empleo y producción, y del trabajo conjunto de actores relevantes, junto con modificaciones a reglas formales e informales que causen exclusión. “Es una forma de desarrollo del territorio que involucra a todos los actores, incluso a los más débiles, en función de una característica que lo distinga; en Chiloé, es su identidad”, explica Carlos Venegas. Este concepto se refiere al sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos, costumbres, valores y creencias; su origen se encuentra en un territorio, donde esa identidad se recrea individual y colectivamente, alimentándose también de la influencia externa.

Una riqueza que se puede compartir

Apoyada en evidencias concretas de la viabilidad económica de las experiencias llevadas a cabo, la investigación constató que en Chiloé existe un potencial real para implementar una estrategia DTR-IC como eje de desarrollo. Efectivamente, ahí habita una comunidad con una densidad cultural importante, activos identificables y un sello territorial reconocido. “Aun cuando existe una industrialización acelerada, producto de la salmonicultura y otras actividades, el fenómeno económico no ha sido

Rutas de Aprendizaje Para conocer el desarrollo local

Para generar diálogo, promover la colaboración y, sobre todo, para analizar experiencias donde la valorización del patrimonio cultural de territorios rurales pobres se está constituyendo en un motor de desarrollo, que contribuye a reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión, el Proyecto DTR-IC ha colaborado en las Rutas de Aprendizaje, herramienta estratégica del Programa Regional Procasur.

Se trata de visitas a los espacios estudiados para conocer, palpar, observar y aprender en terreno con un grupo multidisciplinario de investigadores, actores locales, estudiantes, académicos, artesanos, agentes de desarrollo, tomadores de decisiones, miembros de organizaciones sociales, rurales, de mujeres, etc. Ellos han conocido in situ las experiencias de talentos locales que, a partir de su identidad y cultura, han encontrado diferentes herramientas en productos y servicios para su desarrollo.

En Chiloé se han realizado dos rutas internacionales, con visitas a artesanos, agricultores y productores de servicios turísticos y gastronómicos, las que se combinaron con talleres, debate y espacios de interacción. También se realizó una local, con autoridades y líderes de la zona, que potenció aun más la articulación.

capaz de hacer desaparecer esa continuidad cultural que existe en Chiloé a nivel de los artesanos, productores agrícolas y los servicios de turismo, todas actividades basadas en la identidad cultural”, manifiesta Venegas.

El turismo tiene una importancia creciente en la economía local, lo que se ha traducido en un aumento de la demanda por bienes y servicios que permitan aprovechar los atractivos de la zona que reflejan su particularidad cultural: la comida, la artesanía, las iglesias patrimoniales, los “palafitos” (viviendas construidas sobre pilares, a ras del mar), la biodiversidad y los mitos y leyendas, entre otros. Hoy Chiloé es visitado por 200 mil personas al año, especialmente durante los meses de enero y febrero, en el verano chileno.

Sin embargo, toda esa riqueza se ve amenazada por la desvalorización de los oficios tradicionales, junto con la erosión del patrimonio cultural. Ante ese riesgo, las comunidades deben mantener viva una producción de productos y servicios basados en atributos culturales o naturales, que reflejen tradiciones, conocimientos y técnicas vigentes. Esa identidad es profundamente valorada por los chilotes, los habitantes de la zona. Por ejemplo, Norma Aguilar, quien cultiva papas nativas de la zona, manifestó a los investigadores que cree en la conservación de la diversidad como una necesidad de vida, más allá de los beneficios económicos. Por su parte, Serafín González, del Museo Puente Quilo, que exhibe una muestra de restos arqueológicos y ofrece un servicio de gastronomía, aspira a mantener el valor cultural: a él le satisface que los niños aprendan del lugar.

El estudio analizó el desempeño económico de actividades con Identidad Cultural (IC) con el objetivo de contar con información que aportara al desarrollo de políticas locales. Los productos y servicios analizados generan ingresos que en más de la mitad de los casos sitúan a sus



Foto: Claudia Ranaboldo

La cultura puesta en valor produce riqueza. De hecho, la transmisión de oficios a las nuevas generaciones potencia la superación de la pobreza en Chiloé.

El estudio analizó el desempeño económico de actividades con identidad cultural, con el objetivo de contar con información que aportara al desarrollo de políticas locales.

productores por sobre la línea de la pobreza rural, lo que demuestra que el DTR-IC es una posibilidad real para mejorar su calidad de vida. “La cultura puesta en valor puede ser un factor que produzca riqueza”, enfatiza Venegas. En efecto, en el análisis de caso, se observó cómo influía en la promoción social: en las familias estudiadas se aprecia que la transmisión de un oficio tradicional a las nuevas generaciones potencia la superación de la pobreza. En este sentido, a juicio de los investigadores, si se contara con programas de desarrollo más especializados, se podría crear una línea de trabajo basada en IC que generara ingresos y empleos en microempresas innovadoras.

En términos generales, ciertas actividades que se desarrollan en Chiloé, como la salmonicultura y el turismo, no están regidas por criterios de sustentabilidad, no mejoran la calidad de vida de las comunidades locales ni procuran mantener la disponibilidad y calidad de los recursos. A la industria del salmón se le critica por su impacto negativo en el medioambiente y sus bajos salarios. Su producción ha aumentado 12 veces desde 1992, pero ese crecimiento no se ha reflejado necesariamente en un mejoramiento tecnológico que disminuya los perjuicios ambientales. Por su parte, el turismo tampoco asegura beneficios claros para las comunidades rurales y más débiles. Eso se podría conseguir sólo con políticas que promovieran un desarrollo territorial integral, protegiendo el patrimonio, fomentando la calidad en los servicios y productos con

Talleres de artesanos y el laboratorio territorial en Chiloé Made in Chiloé

La segunda fase del proyecto de Chiloé comenzó con los Talleres Temáticos de Artesanía e Identidad, realizados en el pueblo de Castro el 14 y el 15 de mayo de 2008. Patricio Cerda, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, presentó el nuevo sistema de certificación de origen de la artesanía y varios artesanos compartieron su propia experiencia, generando un valioso intercambio. Participaron 150 personas, provenientes de Chile y Argentina.

El encuentro reflejó los resultados de la primera parte del estudio, demostrando que este modelo de desarrollo está tomando un papel importante. Al respecto, Claudia Ranaboldo, coordinadora del proyecto DTR-IC, explica: "Pudimos comprobar que el proceso en Chiloé ha tomado vuelo propio, ya que los talleres artesanales y otras iniciativas han sido cofinanciadas por varias instancias de la región y por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Asimismo se están gestionando importantes programas con agencias de cooperación externa interesadas en contribuir a la valorización de la biodiversidad y los activos culturales. En base a esta nueva dinámica que se ha generado, hemos decidido con los actores locales organizar el primer Laboratorio Territorial del Proyecto DTR-IC en la isla, en octubre 2008". Estas instancias tienen el objetivo de definir un método común para diseñar y desarrollar estrategias con este modelo en distintos contextos latinoamericanos. El primero se realizará en Chiloé, durante la semana que se inicia el 6 de octubre de 2008, y será organizado con el apoyo del Centro de Educación y Tecnología (CET) de Chile. Incluirá una feria de demostración de productos y servicios con IC y reuniones de especialistas y miembros de los equipos de trabajo del proyecto. Más información, [aquí](#).

IC y favoreciendo la apropiación del patrimonio por parte de la comunidad.

Para que la actividad industrial no erosione la identidad de Chiloé, Venegas estima que las empresas podrían asociarse con proyectos con IC. Cita el ejemplo de las llamadas "rutas del vino" de la zona central de Chile, donde los productores vitivinícolas han implementado atractivos circuitos turísticos, que incluyen lo mejor de la artesanía, gastronomía y el turismo local. "La cultura puesta en valor es una condición que tenemos que tomar en cuenta sí o sí en el desarrollo del futuro de Chiloé, sobre todo en este momento, cuando hay una retirada de las empresas salmoneeras que va a dejar a gente sin trabajo, y muchos campesinos van a tener que volver a sus labores tradicionales", acota el investigador.

Chilotes, unidos, jamás serán...

La realización de los estudios de caso implicó un estrecho contacto con autoridades locales, del ámbito público y privado, que mostró que la IC no se había considerado muy seriamente a nivel de planificación. Sin embargo, cuando algunas autoridades recibieron información concreta y contundente, se mostraron dispuestos a apoyar futuras gestiones para llevar a cabo esta estrategia de desarrollo. En la mayoría de las instituciones estudiadas existe la percepción de que se pueden realizar acciones sin la necesidad de cambios profundos


en sus políticas. Es decir, sólo se requeriría mejorar la gestión y el acceso a la información de productores y organizaciones mediadoras.

La estrategia de DTR-IC exige que las autoridades la comprendan cabalmente como concepto, de modo que puedan liderar su implementación en forma proactiva, convocando los apoyos necesarios. Esto implica la evidente necesidad de un marco regulatorio que identifique y diferencie los productos con IC, agregándoles valor y dándoles un trato preferencial en los espacios públicos de comercialización.

También se constató que existen escasas asociaciones de producción y venta de productos y servicios con IC. Tan sólo siete de los 22 casos estudiados pertenecen a alguna agrupación, de las cuales solamente dos están orientadas a impulsar la IC (la Red de Turismo Rural de Chiloé y la Agrupación de Cesteras de la Isla de Llingua). Los resultados reflejan que la fragilidad de las experiencias es mayor mientras menor sea el grado de acuerdo en el uso de los recursos. Por eso, se concluye que los productores deberán hacer un esfuerzo de asociatividad, respetando iniciativas individuales y modelos de producción innovadores. También habrá que capacitar a mediadores –personas y/o instituciones– en el desarrollo de estrategias con IC, para que ejerzan con mayor calidad una

función “facilitadora”, permitiendo una interlocución con espacios institucionales, financieros y de mercado. Esto, mientras la capacidad de gestión y la asociatividad se instala en los actores locales.

Ese proceso de articulación público-privada, enfocada en la intersección de las misiones institucionales, se instala como una condición para ampliar los efectos del DTR-IC. En esa convergencia, las organizaciones no gubernamentales (ONG) tienen un rol que puede llegar a ser importante en la medida en que acompañen y faciliten las estrategias propias de los pobladores, en particular de los más pobres. “Las ONG, por su flexibilidad, tienen la posibilidad de impulsar corrientes de reflexión, pensamiento y opinión para alcanzar los modelos de desarrollo. Su otra misión es apoyar la circulación y el uso de esos aprendizajes, siendo un eje articulador con otras instituciones menos flexibles, que están regidas por parámetros planificados desde los niveles centrales”, explica Venegas.

La puesta en práctica de estrategias de DTR-IC en Chiloé ya es una realidad. Ahí participaron actores locales como artesanos, productores agrícolas, diseñadores, investigadores, empresarios, representantes gubernamentales, docentes y estudiantes. Ellos comparten el desafío de sacar adelante su tierra y su gente, de la mano de sus tradiciones ancestrales 

Se creó una asociación de gobiernos subnacionales para mejorar las políticas públicas

Latinoamérica, una red rural

Virginia Soto-Aguilar



Foto: Marcelo Agost - Presidencia de la República de Chile

La actual Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, recibió a los asistentes en el Palacio de La Moneda y les dio su apoyo en la creación de la red.

Quince gobernadores, intendentes, prefectos y presidentes regionales de América Latina se reunieron en Chile el pasado mayo. Con la urgencia de tomar acciones a favor del desarrollo de los territorios rurales más pobres de la región, sostuvieron intercambios con autoridades como la actual Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos. Ambos apoyaron la creación de una nueva red de autoridades, que será una instancia inédita de cooperación política en torno al desarrollo territorial rural.

Con la asistencia de 15 autoridades provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Uruguay, se desarrolló en mayo el Encuentro Latinoamericano de Intendentes, Gobernadores y Prefectos para el Desarrollo Rural. La reunión se efectuó en la sede de CEPAL en Chile y fue organizada por Rimisp-Centro

Más información, imágenes, videos de los discursos y declaraciones **aquí**. Para descargar la declaración final del encuentro pulse **aquí**.

Este nuevo espacio de intercambio será una inédita instancia de cooperación para mejorar la gestión de los gobiernos regionales de América Latina en el diario esfuerzo por distribuir los beneficios con equidad, en un contexto internacional de constante cambio y actual crisis de los alimentos.



Foto: Marcelo Agost - Presidencia de la República de Chile

El objetivo de esta red será promover el diálogo político a nivel regional para aportar a la construcción de estrategias y políticas para el desarrollo sostenible de los territorios rurales latinoamericanos.

Latinoamericano para el Desarrollo Rural, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional de Chile (SUBDERE).

Las autoridades asistentes crearon la Red de Gobiernos Subnacionales para el Desarrollo de los Territorios Rurales Latinoamericanos, cuyo objetivo será promover el diálogo político a nivel regional para aportar a la construcción de concepciones, estrategias y políticas para el desarrollo sostenible de las sociedades y territorios rurales de América Latina.

Este nuevo espacio de intercambio será una inédita instancia de cooperación para mejorar la gestión de los gobiernos regionales de América Latina en el diario esfuerzo por distribuir los beneficios con equidad, en un contexto internacional de constante cambio y actual crisis de los alimentos. La red contribuirá a la revalorización de las sociedades y territorios rurales latinoamericanos con un sentido de justicia social.

Autoridades por el desarrollo

La creación de esta red contó con el apoyo de importantes autoridades, que participaron en el Encuentro de Gobernadores. El discurso principal estuvo a cargo del ex Presidente de Chile, Ricardo Lagos, quien llamó a crear un nuevo trato para América Latina, considerando la negativa evolución de su pobreza rural: "Necesitamos un pacto que asegure que contaremos con los alimentos necesarios para sostener la próxima salida de la pobreza

Las autoridades que firmaron la constitución de la red

Los ruralistas

1. Gustavo Baroja, Prefecto de la Provincia de Pichincha, Ecuador.
2. Nora Barrientos, Intendente de la Región de la Araucanía, Chile.
3. Hermes Binner, Gobernador de la Provincia de Santa Fe, Argentina.
4. Marcos Carámbula, Intendente del Departamento de Canelones, Uruguay.
5. Daniel Casañas, Representante del Prefecto de la Provincia de Tungurahua, Ecuador.
6. Mariano Curicama, Prefecto de la Provincia de Chimborazo, Ecuador.
7. Murilo Flores, Representante del Gobernador del Estado de Santa Catarina, Brasil.
8. Amalia García, Gobernadora del Estado de Zacatecas, México.
9. Francisco Jiménez, Representante del Gobernador del Estado de Puebla, México.
10. Antonio Navarro Wolff, Gobernador del Departamento de Nariño, Colombia.
11. Edmundo Santos Pereira, Vice Gobernador del Estado de Bahía, Brasil.
12. Pablo Valenzuela Huanca, Intendente de la Región de Tarapacá, Chile.
13. Sergio Vilela, Representante del Gobernador del Estado de Piauí, Brasil.
14. Elena Yojcom, Gobernadora del Departamento de Sololá, Guatemala.
15. Mariano Zambrano, Prefecto de la Provincia de Manabí, Ecuador.

de 883 millones de personas, teniendo en cuenta la desigualdad de la distribución del ingreso rural en nuestra región, donde no basta el mercado para corregir los desequilibrios sociales y donde necesitamos políticas públicas inteligentes y fuertes que ayuden a transmitir las oportunidades y los beneficios de manera más amplia a los ciudadanos”.

El Director Regional de FAO, José Graziano da Silva, dijo que el alza de precios obliga a duplicar los esfuerzos: “Parece que estamos descubriendo que la comida es un derecho fundamental, pero que ha estado ausente en la vida de 800 millones de personas. En FAO creemos que el alza de precios es una buena oportunidad para destacar el rol del Estado en promover las condiciones para equiparar las oportunidades a la agricultura familiar. No hay cómo alcanzar la seguridad alimentaria sin apoyarse en ella”.

Se acordó que la nueva red representará la visión de las autoridades regionales frente a foros internacionales y coordinará procesos de aprendizaje entre los gobiernos miembros para mejorar las capacidades y programas de desarrollo territorial.


Apoyos en red

Las autoridades presentes en el encuentro también contaron con el entusiasta apoyo de la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, quien los recibió privadamente en el Palacio de La Moneda. Allí pudieron intercambiar opiniones sobre la nueva red de cooperación y la preocupación compartida por el desarrollo de América Latina rural.

El discurso de Ricardo Lagos El nuevo trato del ex Presidente

En su discurso en el Encuentro de los Gobiernos Subnacionales para el Desarrollo Territorial, Ricardo Lagos Escobar llamó a conformar “un nuevo trato para la América Latina rural”. Para descargar el texto del discurso, presione [aquí](#). Para ver el video del discurso, presione [aquí](#).

Se acordó que la nueva red representará la visión de las autoridades regionales frente a foros internacionales y coordinará procesos de aprendizaje entre los gobiernos miembros para mejorar las capacidades y programas de desarrollo territorial. En relación al funcionamiento, se decidió crear una Secretaría General que será apoyada por Rimisp y FAO.

Además, se acordó que podrán ser miembros de esta red todas las máximas autoridades de los gobiernos subnacionales de los países de la región. Los dirigentes que participaron en la constitución de la red eligieron como coordinador general a Lázaro Cárdenas Batel, ex Gobernador del Estado de Michoacán, México. Cárdenas agradeció la confianza depositada en él y asumió el compromiso de llevar a cabo los acuerdos adoptados en Santiago, tanto para el fortalecimiento de la red como para elevar el aporte de los gobiernos subnacionales al desarrollo de los territorios rurales de América Latina 

Comité Editorial:

Julio Berdegú
Manuel Chiriboga
Gilles Cliche
Eduardo Ramírez
Claudia Ranaboldo
Alexander Schejtman

Equipo Coordinador:

Rosamelia Andrade
Carolina Porras
Adrián Puentes
Ximena Sanclemente
Virginia Soto-Aguilar

Periodistas:

Raúl Hernández
Paola Ligasacchi
María Elena Montory
Andrea Sanz
Valeria Vilardo

Columnistas:

Ricardo Abramovay
Manuel Chiriboga
Ileana Gómez

Equipo de Diseño:

María Eugenia Báez
Francisco Cabrera

Fotografía Portada:

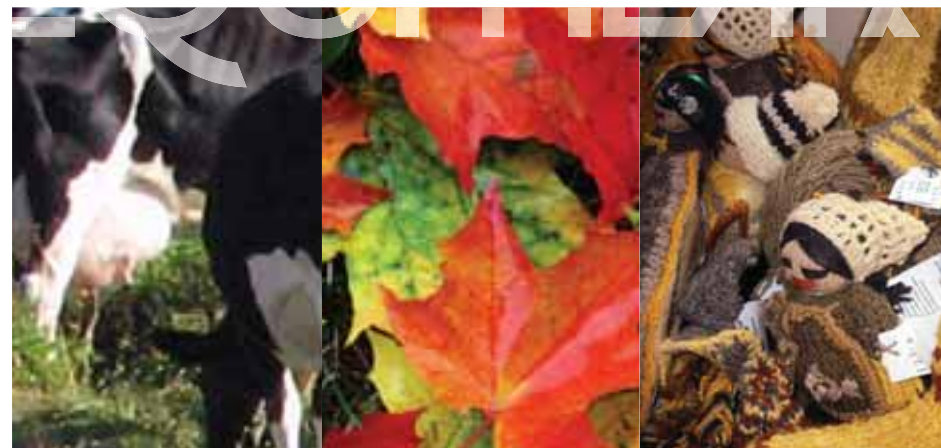
Juan Esteban Arias



Equitierra es una revista producida por el Area Dinámicas Territoriales Rurales de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Esta publicación está auspiciada por la Fundación Ford y el Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo (IDRC, Canadá).



equitierra@rimisp.org



www.rimisp.org/equitierra